

Correo Argentina Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420
	TARIFA REDUCIDA Concesión N° 3146

REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

23ª REUNIÓN — 14ª SESIÓN ORDINARIA — 2 DE SEPTIEMBRE DE 1992

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor EDUARDO MENEM,

y del señor vicepresidente del Honorable Senado,  
don ORALDO N. BRITOS

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y señor EDGARDO P. V. MURGUÍA

Prosecretarios: señores JUAN JOSÉ CANALS y DONALDO ANTONIO DIR

### PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.  
AMOEDO, Julio A.  
BENÍTEZ, Alfredo L.  
BRASESCO, Luis A. J.  
BRAVO, Leopoldo  
BRAVO HERRERA, Horacio F.  
BRITOS, Oraldo N.  
CENDOYA, Jorge J.  
CONCHEZ, Pedro A.  
COSTANZO, Remo J.  
FIGUEROA, José O.  
GASS, Adolfo  
GENOUD, José  
GURDULICH de CORREA, Lilitiana I.  
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.  
JUÁREZ, Carlos A.  
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.  
LEÓN, Luis A.  
LOSADA, Mario A.  
LUDUEÑA, Felipe E.  
MAC KARTHY, César  
MALHARRO de TORRES, Margarita  
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.  
MAZZUCCO, Faustino M.  
MENEM, Eduardo

NIEVES, Rogelio J.  
OTERO, Edison  
OYARZÚN, Juan Carlos  
POSLEMAN, Eduardo A.  
RIVAS, Olijela del Valle  
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.  
ROMERO, Juan Carlos  
ROMERO FERIS, José A.  
SAADI de DENTONE, Alicia A.  
SAMUDIO GODOY, Wilfrido  
SÁNCHEZ, Libardo N.  
SOLANA, Jorge D.  
STORANI, Conrado H.  
TRILLA, Juan  
VELÁZQUEZ, Héctor J.

### AUSENTES, CON AVISO:

MOLINA, Pedro E.  
RUBEO, Luis  
SAPAG, Elías  
VACA, Eduardo P.

### EN COMISION:

BITTEL, Deolindo F.  
MARTÍNEZ, Daniel E.  
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito

## SUMARIO

1. Por invitación del señor presidente del Honorable Senado, el señor senador por Formosa, doctor Rogelio Nieves, procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 2290.)
2. Lectura y aprobación del plan de labor para la sesión de la fecha. (Pág. 2290.)
3. A moción de la señora senadora Malharro de Torres se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación por el que se solicita se declare de interés nacional la "Obra del Padre Mario Pantaleo", a la vez que se rinde homenaje a dicho religioso. (S.-640/92.) (Pág. 2291.)
4. Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión por el que se ratifica el acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales referido al financiamiento del sistema previsional y la distribución de fondos coparticipables. (C.D.-43/92.) Se aprueba. (Pág. 2293.)
5. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley del que es autor por el que se rectifican los anexos I al X de la ley 24.121, sobre creación de cargos para la implementación del juicio oral. (S.-694/92.) (Pág. 2325.)
6. A moción del señor senador Jiménez Montilla se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley del que es autor por el que se sustituye el artículo 538 de la ley 23.984 (Código Procesal Penal). (S.-693/92.) (Pág. 2328.)
7. A moción del señor senador Costanzo se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor junto con otros señores senadores por el que se solicita se declare de interés nacional el Seminario "La Patagonia y el MERCOSUR", a realizarse en Bariloche. (S.-490/92.) (Pág. 2330.)
8. A moción del señor senador Posleman se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor junto con el señor senador Bravo referido a contratos celebrados entre Obras Sanitarias de la Nación y proveedores de sulfato de aluminio natural producido en Calingasta, San Juan. (S.-678/92.) (Pág. 2331.)
9. Moción de preferencia formulada por el señor senador Romero Feris para considerar en la semana próxima el proyecto de ley sobre reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia. (S.-134/92.) Se rechaza. (Pág. 2332.)
10. Apéndice:
  - I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 2333.)
  - II. Inserciones. (Pág. 2333.)

— En Buenos Aires, a las 18 y 38 del miércoles 2 de septiembre de 1992.

Sr. Presidente (Menem). — La sesión está abierta.

1

## IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Invito al señor senador por Formosa, contador Rogelio Nieves, a izar la bandera en el mástil del recinto. A la vez invito a los presentes a ponerse de pie.

— Puestos de pie los presentes, el señor senador Nieves procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.  
*Aplausos.*

2

## PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Menem). — De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 174 del Reglamento de esta Cámara, por Secretaría se leerá el plan de labor aprobado en la reunión de presidentes de bloque celebrada ayer.

Sr. Secretario (Piuze). — Plan de labor parlamentaria para la sesión del 2 de septiembre de 1992.

Consideración del proyecto de comunicación de los señores senadores Storani y Vaca por el que se solicita se declare de interés nacional la obra del padre Mario Pantaleo.

Consideración de los órdenes del día N° 282 — en particular —, 283, 313 y 358 a 392, excepto el 390.

Consideración del proyecto de ley en revisión por el que se ratifica el acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales sobre financiamiento del sistema previsional y distribución de fondos coparticipados, que tiene preferencia para hoy, con dictamen de comisión o sin él.

Preferencias a solicitar: proyecto de ley del señor senador Romero Feris por el que se fija un plazo para la remisión al Congreso de los decretos que por razones de urgencia emanen del Poder Ejecutivo nacional; proyecto de ley en revisión sobre el Banco Hipotecario Nacional; proyecto de ley de los señores senadores Bravo y Posleman por el que se deroga el decreto del Poder Ejecutivo nacional 879/92; proyecto de ley en revisión por el que se desagravia el nombre y la memoria de Santiago Mainini y Reclús de Diago y el nombre de Pascual Vuotto, respecto de una sentencia que recayera sobre ellos; proyecto de ley del señor senador Brasco sobre creación del Consejo Económico Social del Mercosur en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Asuntos a solicitar sobre tablas: proyecto de comunicación del señor senador León sobre cré-

ditos a los productores agropecuarios del Chaco; proyecto de comunicación de los señores senadores Bravo y Posleman sobre contrato de sulfato de aluminio (Calingasta), expediente S.-678/92; dictamen de comisión en el proyecto de comunicación del señor senador Costanzo y otros señores senadores, por el que se solicita se declare de interés nacional el Seminario "La Patagonia y el Mercosur", expediente S.-490/92.

Por último, correspondería la consideración de los asuntos que hubiesen sido reservados.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración el plan de labor propuesto.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Ratifico el plan de labor que acaba de ser leído, con la siguiente aclaración: en la reunión de presidentes de bloque realizada hoy decidimos solicitar a la Cámara que después del homenaje al padre Mario se considere el proyecto de ley en revisión referido al acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cass.** — Ratifico lo dicho por el señor senador presidente del bloque justicialista.

Por otra parte, solicito que se trate sobre tablas el proyecto de comunicación referido a la obra del padre Mario.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Romero Feris.** — Señor presidente: cuando se enunció mi proyecto de ley para el que se propone fijar preferencia, no se dijo que es el referido a los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo. Quiero cerciorarme de que ése es el proyecto incluido en el plan de labor.

**Sr. Presidente (Menem).** — Efectivamente, señor senador; el proyecto enunciado es ése al que usted se refiere.

**Sr. Romero Feris.** — Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor propuesto, con la modificación a que hizo referencia el señor senador por San Luis y que fuera aceptada por el señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobado el plan de labor.

3

## HOMENAJE AL PADRE MARIO PANTALEO

**Sr. Presidente (Menem).** — En consecuencia, en primer término corresponde rendir el homenaje propuesto.

Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

**Sra. Malharro de Torres.** — Señor presidente: el homenaje que se propone está ligado a un proyecto de comunicación que se encuentra sobre las bancas de los señores senadores, por el que se solicita la declaración de interés nacional de la "Obra del Padre Mario Pantaleo". Por tal motivo, solicito su tratamiento sobre tablas.

**Sr. Presidente (Menem).** — Por Secretaría se dará lectura al proyecto de comunicación.

**Sr. Secretario (PiuZZi).** — *(Lee)*

### Proyecto de comunicación

#### *El Senado de la Nación*

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, declare de interés nacional la denominada "Obra del Padre Mario Pantaleo" desarrollada por la Fundación Presbítero José Mario Pantaleo y la Fundación Nuestra Señora del Hogar, ubicadas en el paraje Villa Carmen de la localidad de González Catán.

*Conrado Storani. — Eduardo P. Vaca.*

### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presbítero José Mario Pantaleo, de origen italiano, vino muy joven a la Argentina a ejercer su ministerio asentándose en la Diócesis de San Justo en un lugar de gran densidad poblacional y bajo nivel económico denominado Villa Carmen, en González Catán.

Junto a su acción pastoral comienza su acción social destinada primordialmente a la ayuda y protección de los niños y de la juventud. En 1972 se coloca la piedra fundamental de la Iglesia Cristo Caminante. Las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, asistentes del padre Mario en su misión sacerdotal, para asegurar la continuidad de sus obras se constituyen las dos fundaciones referidas en el proyecto debidamente inscriptas en el registro correspondiente e incorporadas al elenco de entidades de bien público de la DGI y las municipalidades de Buenos Aires y de La Matanza.

La amplia acción social y pastoral desarrollada por el padre Mario ha permitido construir una considerable infraestructura física que ofrece servicios sociales y educativos a una comunidad de muy escasos recursos atendiendo las necesidades de las personas que requieran ayuda.

Toda esta gran obra, al servicio de los más necesitados, constituye un verdadero símbolo y merece, desde ya, nuestra adhesión y apoyo. Fundamentalmente, la reciente y dolorosa noticia del fallecimiento del padre

Mario aumenta el compromiso de asegurar la continuidad de su obra y este pedido de declaración de interés nacional contribuye a ello. Por todo lo expuesto, solicito la pronta aprobación del presente proyecto.

*Conrado Storani. — Eduardo P. Vaca.*

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la señora senadora por Mendoza.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración en general.

Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

**Sra. Malharro de Torres.** — Agradezco al cuerpo que me haya otorgado la posibilidad de rendir este homenaje. Lamento no haber tenido más tiempo para profundizar sobre la vida de este sacerdote, de este inmigrante italiano que vino a la Argentina y que como muchos otros religiosos que llegaron al país desarrolló una obra constante, diaria, acompañado por una comunidad laboriosa que captó hacia dónde se orientaba la obra del padre Mario Pantaleo. Más allá de su accionar sobre las almas, como sacerdote que pertenecía a una determinada religión, comprendió que la zona donde se centraba su labor era, como tantas otras de nuestro país, una que necesitaba el apoyo de sus ciudadanos y dirigentes, como realmente lo era este sacerdote probo. Entendió que a veces el trabajo sobre las almas es importante, pero también lo es que vaya acompañado de una comprensión de las necesidades materiales, educativas, físicas y culturales de la comunidad.

Por eso, señor presidente, la mejor forma de rendir un homenaje a hombres como este, que vinieron a nuestro país y ayudaron a levantarlo desde su base, sobre todo actuando sobre las capas más necesitadas de nuestra sociedad, es con la aprobación por parte de este Senado de este proyecto de comunicación por el cual pedimos al Poder Ejecutivo de la Nación que declare de interés nacional la denominada "Obra del Padre Mario Pantaleo", desarrollada por la Fundación Presbítero José Mario Pantaleo y la Fundación Nuestra Señora del Hogar.

Quienes estamos aquí consideramos que esta es una forma de hacer que su nombre perdure, aunque no me cabe duda alguna de que ya está inscrito en el alma y en el corazón de todos los que han sido beneficiados con su obra y de aquellos que han caminado con él para profun-

dizar esta tarea, esta obra de apoyo y reivindicación que es parte de la sociedad.

En este sentido pido que los señores senadores me acompañen dando voto favorable a este proyecto de comunicación.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Storani.** — Señor presidente: adhiero a los conceptos expresados por la señora senadora por Mendoza. Pero no puedo dejar de pronunciar unas pocas palabras referentes a esta iniciativa que con el senador Vaca presentamos hace unos días, antes de la muerte que lamentablemente se produjera del presbítero Mario Pantaleo.

Considero que este camino no es más que una ratificación de la justicia con que deben moverse los poderes del Estado. El señor presidente de la Nación, tengo entendido que también el señor presidente provisional del Senado, y muchos de nosotros en distintas etapas de nuestra vida hemos conocido las realizaciones llevadas a cabo en un medio social absolutamente desvalido y desamparado, como es el de González Catán, la zona en que el padre Mario Pantaleo desarrolló su actividad, beneficiando a miles y miles de hombres, mujeres — fundamentalmente jóvenes — y niños, en muchos casos discapacitados. Para ello creó y están en funcionamiento institutos ejemplares, de una gran categoría social y muy bien dotados.

Quienes tuvimos la oportunidad de ejercer funciones ejecutivas en algún momento, como es el caso del que habla, siendo ministro de Salud y Acción Social de la Nación, fuimos interesados por este hombre singularmente dotado de una bondad infinita, para quien el bien por el bien mismo, sin ningún interés subalterno, era derramado a manos llenas.

Visité las obras y, a través de la gestión del Poder Ejecutivo nacional, pude arrimar algunos recursos que en su momento fueron importantes. Pero es de destacar que, fundamentalmente, una inmensa legión de mujeres y hombres del lugar y de muchas otras partes de nuestra Capital y de la provincia de Buenos Aires fueron quienes rodearon estas obras de bien con el afecto, el cariño y la devoción necesarios cuando se llevan a cabo estas cosas en beneficio de los demás. Esta es una muestra de solidaridad social, de la justicia que llega de la mano de un hombre, representante de Dios en la tierra, que — repito — derramaba amor a manos llenas.

Pedirle al Poder Ejecutivo que declare de interés nacional estas dos fundaciones es lo menos

que podemos hacer quienes hemos conocido la benemérita institución y la acción de este sacerdote.

Pero también pienso que posteriormente tendríamos que proteger estas fundaciones con alguna disposición legal que debemos discutir y conversar primero en el seno de este Senado y luego en la Cámara de Diputados. Esto a los efectos de que ningún interés extraño pueda arrebatarnos el primero y último designio que él tuvo al poner en funcionamiento semejante aparato de beneficio social, porque siempre existen al acecho intereses dudosos que pretenden desnaturalizar la finalidad deseada.

Por lo expuesto yo también solicito el voto favorable del cuerpo para este proyecto de comunicación.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Cass.** — Señor presidente: solicito que guardemos un minuto de silencio en homenaje al padre Mario quien, como bien se ha dicho aquí, ha hecho tanto por la provincia a la que represento. No sólo acercó su capacidad espiritual sino también su bondad y su conocimiento de la gente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — En nombre del bloque justicialista queremos ratificar que el homenaje rendido por la señora senadora por Mendoza ha sido en representación de todos los bloques.

Apoyamos el pedido de aprobación del proyecto, así como también el minuto de silencio solicitado por el señor senador por Buenos Aires.

Sólo quiero agregar que para nosotros el padre Mario ha sido un ejemplo para la juventud; y creo que podemos definir su vida como la de un santo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: simplemente quiero ratificar en nombre de los bloques de los partidos provinciales la adhesión a este homenaje.

La figura del padre Mario ha sido vastamente conocida no sólo en el lugar inmediato donde él realizaba sus tareas sino en todo el ámbito nacional. Y puedo dar testimonio de que también lo fue afuera de nuestras fronteras. Me tocó conocerlo en Venezuela y supe que también allí contaba con admiradores que valoraban la intensa labor de humana comprensión y de amor al

prójimo que este sacerdote excepcional realizaba.

Por estas razones compartimos plenamente los conceptos que aquí se han vertido y adherimos con sinceridad a este justiciero homenaje.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

**Sr. Jiménez Montilla.** — Señor presidente: sin desmerecer los grandes y elocuentes méritos del padre Mario, a cuyo homenaje y recordación también me sumo —así como también a todos los homenajes que hemos venido prodigando en las distintas sesiones a aquellas personas que han dado su vida o que se han brindado para que los argentinos podamos tener un ejemplo o un devenir mejor—, quiero recordar también que por una razón legal y reglamentaria los homenajes deben pasar previamente por la Comisión de Interior y Justicia, cuyo presidente también ha hecho uso de la palabra en esta ocasión.

Adhiero a las palabras de los señores senadores y el homenaje rendido por el presidente de la Comisión de Interior y Justicia. Pero también quiero recordar que las leyes se han hecho para que sean cumplidas.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia. Si hay asentimiento, procederemos ahora a rendir el homenaje propuesto guardando un minuto de silencio.

— Asentimiento.

— Puestos de pie los presentes, así se hace.

**Sr. Presidente (Menem).** — De esta forma queda rendido el homenaje al padre Mario Pantaleo, al que esta Presidencia adhiere por su investidura. Del mismo modo adhiero a este homenaje como senador. *(Aplausos en las bancas y en las galerías.)*

4

#### FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL Y DISTRIBUCION DE LOS FONDOS COPARTICIPABLES

**Sr. Presidente (Menem).** — De acuerdo con el plan de labor aprobado...

**Sr. Genoud.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** — Es para solicitar que nos apartemos del plan de labor parlamentaria para tratar como primer tema el proyecto de ley que ratifica el acuerdo entre la Nación y las provincias.

**Sr. Presidente (Menem).** — Eso ha sido votado anteriormente. Si no se dispone lo contrario, corresponde que antes de considerar ese tema se lea la nómina de los asuntos entrados. Posteriormente se tratarán todos los asuntos, salvo que los señores senadores...

**Sr. Gass.** — Pido que se desplace.

**Sr. Presidente (Menem).** — ¿Debe interpretarse que el desplazamiento también incluye la lectura de la nómina de asuntos entrados?

**Sr. Gass.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Estamos de acuerdo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión, expediente C.D.-43/92, por el cual se ratifica el acuerdo entre el gobierno de la Nación y los gobiernos provinciales, suscrito el 12 de agosto de 1992, sobre financiamiento del sistema previsional y distribución de los fondos coparticipables.

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Piuze).** — (Lee)

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Ratifícase, en lo que es materia de competencia del Congreso Nacional, el "Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales", suscrito el 12 de agosto entre el Poder Ejecutivo nacional y los señores gobernadores de las provincias y/o quienes en su representación lo firmaran, y que como anexo I, forma parte integrante de la presente.

Art. 2º — A los efectos de la ratificación a la que refiere el artículo anterior:

a) Suspéndese, a partir del 1º de septiembre de 1992, en lo que se oponga al acuerdo arribado, y por el tiempo establecido en el mismo para cada caso, la estricta aplicación de las siguientes leyes y sus modificatorias: 23.548 (Coparticipación Federal), 21.581 (FONAVI), 23.615 (COFAPyS), 15.336 (FEDEI), y decreto ley 505/58 (Fondo Vial Federal);

b) Ténganse por modificadas, en los términos y por los plazos que establece el acuerdo que por la presente se ratifica, las leyes consignadas en el inciso anterior.

Art. 3º — A los efectos del cumplimiento de la presente ley, facúltase al Poder Ejecutivo nacional a introducir las modificaciones pertinentes en la Ley de Presupuesto General de la Nación, correspondiente al ejercicio en curso.

Art. 4º — Prorrógase la fecha de corte establecida en el artículo 1º de la ley 23.982 respecto de las deudas previ-

sionales, a cuyo fin se considerarán las que hayan vencido o sean de causa o título anterior al 31 de agosto de 1992.

Art. 5º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a suscribir el convenio que forma parte integrante de la presente ley como anexo I, con aquellas provincias que aún no lo hubieren realizado.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

#### ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS PROVINCIALES

En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de agosto de 1992, se reúnen el señor presidente de la Nación Argentina, don Carlos Saúl Menem, y los señores gobernadores de las provincias de Buenos Aires, don Eduardo Duhalde; Catamarca, don Arnoldo Castillo; Chaco, don Rolando Tauquinas; Entre Ríos, don Mario Moine; Formosa, don Vicente Joga; Jujuy, don Roberto Domínguez; La Pampa, don Rubén Marín; La Rioja, don Bernabé Arnaudo; Mendoza, don Rodolfo Gabrielli; Misiones, don Ramón Puerta; Río Negro, don Horacio Massaccesi; Salta, don Roberto Ulloa; San Juan, don Jorge Escobar; San Luis, don Adolfo Rodríguez; Santa Cruz, don Néstor Carlos Kischer; Santa Fe, don Carlos A. Reutemann; Santiago del Estero, ingeniero Carlos Aldo Mujica; Tierra del Fuego, don José Estabillio; Tucumán, don Ramón Ortega; Chubut, don Carlos Maestro, y los señores vicegobernadores de las provincias de Córdoba, don Edgardo Grosso; Neuquén, don Felipe Rodolfo Sapag, y los señores ministros de Interior, don José Luis Manzano; de Economía y Obras y Servicios Públicos, don Domingo Felipe Cavallo, y el señor secretario general de la Presidencia de la Nación, don Eduardo Bauzá, a los efectos de acordar la realización de acciones concurrentes a la consecución de los siguientes objetivos:

- Asistir a las necesidades sociales básicas, especialmente aquellas vinculadas al sector pasivo.
- Afianzar el federalismo reconociendo el creciente papel de los gobiernos provinciales y municipales en la atención de las demandas sociales de la población.
- Garantizar la estabilidad económica y consolidar las bases para el crecimiento económico.
- Profundizar la reforma del sector público en sus dimensiones nacional, provincial y municipal.
- Facilitar el acceso a la vivienda.
- Profundizar el proceso de descentralización como modelo para la prestación de las funciones básicas del Estado.

En tal sentido se acuerda:

-Primera: a partir del 1º de septiembre de 1992, el Estado nacional queda autorizado a retener un quince por ciento (15%), con más una suma fija de \$ 43.800.000 mensual, de la masa de impuestos coparticipables prevista en el artículo 2º de la ley 23.548 y sus modificatorias vigentes a la fecha de la firma del presente, en concepto de aportes de todos los niveles estatales que integran la federación para los siguientes destinos:

- a) El quince por ciento (15%) para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios;

b) La suma de \$ 43.500.000 para ser distribuida entre los estados provinciales suscriptores del presente convenio, con el objeto de cubrir los desequilibrios fiscales, siguiéndose el procedimiento previsto en los artículos 6° y concordantes de la ley 23.548 y de acuerdo con lo que se dispone a continuación:

- Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut: \$ 3.000.000 cada una.
- Río Negro, La Pampa, Neuquén y Salta: \$ 2.500.000 cada una.
- Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Mendoza y San Luis: \$ 2.200.000 cada una.
- Entre Ríos: \$ 1.900.000.
- Córdoba y Santa Fe: \$ 500.000 cada una para afrontar los costos de los servicios ferroviarios.

*Segunda:* el Poder Ejecutivo nacional procederá a la derogación de los decretos nacionales 559/92 y 701/92 los que, de cualquier modo, dejarán de ser aplicados a partir del 1° de septiembre de 1992. Las sumas retenidas por el Estado nacional, como consecuencia de la aplicación de los referidos decretos, no serán reintegrables, a cuyo único efecto el presente convenio se considerará vigente a partir del 1° de abril de 1992.

*Tercera:* atendiendo al esfuerzo realizado por los estados provinciales y con el objeto de evitar que tan elevada actitud derive en desequilibrios fiscales involuntarios, la Nación garantiza a las provincias un ingreso mensual mínimo (neto de las deducciones establecidas por la cláusula primera, las leyes 23.966 y 24.073 y el financiamiento del costo de los servicios transferidos según las leyes 24.049 y 24.061 y el decreto 964/92) proveniente del régimen de la ley 23.548 de \$ 725.000.000. La aplicación de esta cláusula de garantía operará en forma bimestral, por lo que el Tesoro nacional adelantará los fondos necesarios para llegar a ese valor, que compensará con los excedentes que se produzcan en los meses siguientes cuando la participación de las provincias supere los \$ 725.000.000. Esta cláusula de garantía tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993.

*Cuarta:* las partes limitan el incremento de sus gastos corrientes, a ser financiados con recursos de coparticipación durante el ejercicio 1993, a un 10% por sobre lo efectivamente erogado por ese concepto durante el ejercicio de 1992, incluyendo los servicios transferidos para las provincias; en base a ello las provincias harán sus previsiones presupuestarias por un monto de coparticipación bruta de \$ 10.890.000.000. Los excedentes por sobre ese límite sólo podrán destinarse a cancelar deudas contraídas previamente al acuerdo y a financiar erogaciones de capital.

*Quinta:* a partir del 1° de septiembre de 1992, el Poder Ejecutivo nacional remitirá a las provincias, con carácter automático y dentro de las limitaciones autorizadas por ley de presupuesto respectiva y las acordadas con organismos internacionales, los recursos financieros que componen los siguientes fondos:

- Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).

- Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento (COFAPyS).
- Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI).
- Fondo Vial Federal.

La distribución específica de los fondos para cada jurisdicción deberá respetar los actuales niveles comprometidos, considerándose saldadas las acreencias mutuas entre la Nación y las provincias por todo concepto en lo relativo a los fondos mencionados en esta cláusula.

En lo concerniente al FONAVI, la distribución se efectuará de acuerdo con el coeficiente del mes de diciembre de la resolución 765/89 de la Secretaría de Vivienda de la Nación, comprometiéndose las provincias respectivas a cumplir con lo establecido en el convenio celebrado por el Ministerio de Salud y Acción Social, los gobiernos provinciales y la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Asimismo se respetarán los mayores cupos asignados a las provincias afectadas por la epidemia del cólera para programas de saneamiento.

En lo que respecta al FONAVI y al COFAPyS, los fondos que por su operatoria específica se perciban en concepto de recupero, serán administrados por las respectivas jurisdicciones provinciales. De la misma forma, se asigna como responsabilidad de cada provincia los servicios de los préstamos con organismos internacionales que se hayan ejecutado en su jurisdicción.

A los efectos de confeccionar un proyecto de ley que garantice la transferencia definitiva, la descentralización y la optimización en el uso de los fondos precedentemente citados, se conformará una comisión integrada por representantes de los Poderes Ejecutivos de las jurisdicciones involucradas, las que deberán expedirse en un plazo de 30 días a partir de la firma del presente convenio.

*Sexta:* Las provincias que hubieren promovido acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o ante cualquier otro tribunal del país, con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad o cualquier otro tipo de impugnación de los decretos 559/92 y 701/92, pedirán la terminación de los procesos respectivos por falta de objeto y con imposición de costas en el orden causado; aquellas provincias que a la fecha de la presente no hubieran iniciado tales procesos se abstendrán de hacerlo en el futuro. El Estado nacional presta su conformidad, desde ya a dicha vía de terminación de los procesos judiciales referidos.

El Estado nacional se compromete a no detracer de la masa coparticipable porcentajes o montos adicionales a los convenidos en este acuerdo, ni a transferir nuevos servicios en la conformidad expresa de las provincias. En el caso de la provincia de Tierra del Fuego, cuando se alude al régimen de coparticipación se entiende que comprende al decreto 2.456/90.

*Séptima:* Solicitar al Congreso de la Nación el tratamiento de los siguientes proyectos de ley:

- a) Reforma del régimen nacional de previsión social;
- b) Federalización de hidrocarburos y privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El Poder Ejecutivo nacional afectará los fondos de la venta

de las acciones de YPF, que son propiedad de la Nación, a la capitalización del régimen nacional de provisión social:

- c) Facultando al Poder Ejecutivo nacional a cerrar los acuerdos de compensación al 31 de marzo de 1991 por el sector público nacional;
- d) Privatización de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Casa de la Moneda y Banco Nacional de Desarrollo. El Poder Ejecutivo nacional afectará el 50% de los fondos que se originen con sus ventas al financiamiento de la reforma de los Estados provinciales;
- e) Administración financiera y control de gestión;
- f) Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina;
- g) Prórroga de los artículos de las leyes 23.696 (de Reforma del Estado) y 23.697 (de Emergencia Económica), en vigencia a la fecha de la firma de esta acta, por un plazo de 365 días.

Los gobiernos provinciales solicitarán a sus respectivas Legislaturas la aprobación de presupuestos equilibrados, a cuyos efectos contemplarán la generación de los recursos necesarios o la realización de las economías correspondientes.

Las partes se comprometen a firmar los convenios de transferencia de servicios según lo establecido por las leyes 24.049 y 24.061 y el decreto 964/92 antes del 31 de diciembre de 1992, garantizándose a las provincias el financiamiento de los costos de los servicios transferidos, de acuerdo a las citadas normas.

*Octava:* El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993. Las provincias y la Nación se comprometen a seguir financiando mancomunadamente el régimen nacional de provisión social, por lo cual se asegurará el descuento del 15% de la masa de impuestos coparticipables hasta tanto no exista un nuevo acuerdo de partes o una nueva ley de coparticipación federal.

Cualquier modificación que se introduzca en el índice corrector a partir del 1° de enero de 1994, no podrá significar disminución en términos absolutos de la coparticipación recibida por las provincias beneficiadas por dicho índice en 1993.

*Novena:* El presente convenio será aplicado por las partes en forma inmediata, sin perjuicio del cumplimiento en cada jurisdicción de sus respectivas normas de derecho público y constitucional.

*Décima:* La presente acta acuerdo será comunicada al Honorable Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo nacional para su ratificación.

**Sr. Presidente (Menem).** — En primer término lo ponemos en consideración en general.

**Sr. Genoud.** — Hay que discutirlo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Por eso, señor senador, al ponerlo en consideración en general los miembros informantes tienen que pedir la palabra.

**Sr. Rodríguez Saá.** — De ninguna manera íbamos a votarlo.

**Sr. Genoud.** — Parecía que el señor senador por Salta estaba votando...

**Sr. Romero.** — No era voto sino que quería hacer uso de la palabra.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Nos peleamos por hacer uso de la palabra. *(Risas.)*

**Sr. Velázquez.** — Como para los votos son un poco rápidos... *(Risas.)*

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Romero.** — Señor presidente: corresponde considerar la ratificación legislativa del acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales suscrita el 12 de agosto del corriente año.

En el artículo 1° del proyecto se ratifica el acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en toda aquella materia de competencia del Congreso Nacional.

Por el artículo 2° se suspenden varias leyes nacionales: la 23.548, de coparticipación federal; la 21.581, del Fondo Nacional de la Vivienda; la 23.615, de Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento; la 15.336, de Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior, y el decreto ley 505/58, del Fondo Vial Federal. Al margen de la modificación de estas leyes, no podemos desconocer que lo que persigue este texto legal es allegar fondos para cumplir con las prestaciones jubilatorias a cargo del gobierno nacional y también posibilitar y facilitar el proceso de reforma económico estructural por parte de los gobiernos provinciales.

La negociación entre la Nación y las provincias se basa en la relación de distribución de los fondos federales. Al verse incrementados los fondos coparticipables por la optimización de la recaudación y por las leyes tributarias que este Congreso ha aprobado, se hace necesario —así lo entendieron los gobernadores y el Poder Ejecutivo— ceder un 15 por ciento de esa masa coparticipable en beneficio del sector pasivo que debe ser atendido por el sistema nacional. Se retiene además una suma fija de 43.800.000 pesos mensuales. El 15 por ciento anticipado se dirige al pago de obligaciones previsionales y la suma de 43.800.000 pesos integrará un fondo compensador a distribuir entre varias jurisdicciones provinciales que tienen algunas características que las hacen merecedoras de esas sumas.

Este acuerdo regirá hasta el 31 de diciembre de 1993. Anticipadamente a esa fecha se deberá discutir lo que será el pacto federal de distribución. Entonces, la ley convenio 23.548 deberá

ser modificada al tratarse el pacto en una comisión especial que tendrá a su cargo dicha tarea.

Según el marco-acuerdo, el Estado nacional renunciará a la continuidad de los decretos 559/92 y 701/92, por los cuales transfería a las provincias los costos de recaudación impositiva de los impuestos coparticipables, reconociendo implícitamente que dichas normas habían sido cuestionadas. Así, por esta vía, se encuentra una mejor instrumentación que la que hasta ahora se había intentado.

El mencionado pacto garantiza a las provincias una masa coparticipable de 725 millones de pesos mensuales, lo que operaría como una cláusula de garantía mínima para la distribución por parte del gobierno. Entendemos que de esta manera se evita el riesgo de que una baja en la recaudación pudiera significar menores ingresos que los que tenían previstos las provincias. Sin duda, dicha cláusula opera en favor de las provincias en el caso —repito— de una eventual caída en la recaudación.

Además, hay otra cláusula muy importante según la cual tanto la Nación como las provincias convienen en limitar el incremento de sus gastos corrientes durante el ejercicio 1993 a un diez por ciento sobre lo efectivamente gastado por ese concepto en 1992.

Si se entiende que el índice de precios superará el diez por ciento en términos reales, esto va a significar una baja en los gastos como consecuencia de la autolimitación que se impondrán tanto la Nación como las provincias para el ejercicio 1993.

Además, como anunciamos al comienzo, para compensar a las provincias por esta cesión que hacen en materia de recursos coparticipados, en el acuerdo se prevé girarles automáticamente fondos que tenían destinos específicos, y que deberán seguir teniéndolos, como son los que antes operaba la Nación; por ejemplo, los que correspondían al Fondo Nacional de la Vivienda, al Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento, al Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior y al Fondo Vial Federal.

Por otra parte, una comisión especial tendrá a su cargo el estudio de las operatorias de descentralización y de afectación específica de las sumas que componen los fondos antes citados.

Estos son, en síntesis, los grandes aspectos de este acuerdo que, obviamente, se deberá completar o complementar cuando discutamos en el corriente año un texto definitivo de la ley de coparticipación entre la Nación y las provincias que contribuya al afianzamiento de la estabilidad

lograda y a la obtención de las metas de las reformas estructurales del sector público, tanto en el orden nacional como provincial.

Por lo tanto, está prácticamente en nuestras manos, en quienes conformamos el Congreso, que pronto nos aboquemos al estudio de una definitiva ley de coparticipación.

Por lo expuesto anteriormente, propongo que luego de agotado el debate se vote favorablemente este texto remitido por la Cámara de Diputados.

**Sr. Genoud.** — Pido la palabra.

**Sr. Rodríguez Saá.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Genoud.** — Con mucho gusto.

**Sr. Presidente (Menem).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor presidente: pedí la palabra a los fines de una aclaración práctica, porque creo que va a precisar los términos del debate.

Después de varias horas de discusión se ha acordado hacer una serie de modificaciones al proyecto que ratifica el convenio realizado entre las provincias y la Nación. Las modificaciones consisten en primer término en determinar la especificidad de los fondos.

En segundo lugar, se trata de dar a las provincias la autoridad de aplicación en cuanto a la aptitud técnica, económica y financiera de los proyectos en la cuestión del FONAVI. Asimismo, la fecha de vigencia del acuerdo será a partir del momento en que fue firmado. Además, se aclaran los términos del artículo 7º; se hará un acta firmada que deja perfectamente...

**Sr. Cass.** — Solicito que cuando se trate el proyecto en particular, se propongan las modificaciones que estimamos pertinentes.

**Sr. Rodríguez Saá.** — No tengo ningún inconveniente. Incluso habíamos pensado que fuera el señor senador Genoud quien hablara en nombre de todos acerca de estas modificaciones.

Aclaro simplemente lo que hemos acordado para que no sea motivo de discusión, ya que seguramente todos hablarán en contra de cómo está redactado el proyecto.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** — Señor presidente: es correcto que nosotros vamos a plantear en general nuestra discrepancia con el proyecto de ley que ratifica el acuerdo celebrado entre la Nación y

las provincias en materia de coparticipación federal de impuestos. No obstante, en función de que han habido numerosas sugerencias y propuestas para mejorar el texto venido de la Cámara de Diputados —provenientes del bloque radical, así como también de gobernadores de distintos signos políticos de todo el país que han solicitado la rectificación de ese texto—, se logró, como bien se ha señalado aquí, concertar al menos cuatro modificaciones al proyecto. Eso será motivo de nuestro análisis y de la votación en particular.

Brevemente voy a exponer la posición del bloque de la Unión Cívica Radical, sin perjuicio de que otros señores senadores hagan lo propio ampliando los conceptos que voy a verter, que parten de la premisa de que estamos frente a un proyecto de ley que ratifica un acuerdo entre la Nación y las provincias que no satisface nuestras posiciones en el orden político, económico y financiero.

El acuerdo aborda dos temas que son realmente trascendentes para la Unión Cívica Radical. En primer lugar, ingresa en el tratamiento de cuestiones altamente conflictivas, como son los problemas que la Nación y las provincias tienen desde hace muchas décadas, concretamente éste de la coparticipación federal de impuestos. En este sentido, si bien lleva muchos años la aplicación de este sistema, admite muchísimos reparos en cuanto a su mecanismo.

Además, este proyecto procura encontrar una solución al tema de los jubilados. Somos sensibles a esta preocupación, como lo hemos demostrado cada vez que se ha tratado un proyecto que apunta a la obtención de recursos, de fondos para nuestro sistema previsional.

El sistema de coparticipación federal de impuestos ha producido duras tensiones en los últimos años. En primer lugar, porque las provincias han litigado con la Nación y también porque han forcejeado entre ellas permanentemente para obtener un mayor beneficio en lo que hace a la participación secundaria, o sea con respecto a aquellos recursos destinados a los Estados provinciales.

El sistema de coparticipación ha adolecido —y la práctica así lo indica— de algunos defectos que es necesario poner de manifiesto. Por ejemplo, es un sistema excesivamente estático; carece de la dinámica que requeriría para adaptarse a los premios y castigos que deberían aplicarse en lo que respecta al gasto público en los órdenes provincial y nacional. Esa misma conformación de régimen estático causa en la prác-

tica una deficiencia que hace que no logre adaptarse a situaciones de emergencia que pueden afectar a muchas provincias como, por ejemplo, terremotos e inundaciones. No existe una respuesta del sistema de coparticipación federal de impuestos para adaptarse a esas emergencias que pueden sobrevenir en los distintos Estados provinciales.

Por eso siempre se ha hablado de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Es casi un reclamo unánime de las provincias que están en la búsqueda de un sistema más perfecto en este aspecto.

El propio acuerdo suscripto por los gobiernos provinciales con el presidente de la República establece de algún modo la voluntad inequívoca para procurar armonizar, una vez vencida la vigencia de este acuerdo, un nuevo texto o régimen de coparticipación federal de impuestos.

En lo que se refiere a los jubilados —y esto es preciso que quede puntualizado en este debate— debemos decir que toda iniciativa parlamentaria que ha tenido como finalidad arrimar fondos al sistema previsional ha contado con el apoyo del radicalismo.

Aquí hago mención de la ley Matzkin, que establece un impuesto a los bienes personales que no estén dedicados a la producción; o del destino de parte del impuesto a los combustibles o a los pulsos telefónicos, así como también de la iniciativa que preveía destinar parte del producido por las privatizaciones al sistema previsional.

Ninguna de esas iniciativas dejó de contar con el apoyo positivo, afirmativo de la bancada de la Unión Cívica Radical. Cuando se estableció por ley un tratamiento especial para los acreedores del Estado que fuesen jubilados también en esa oportunidad se contó con nuestro apoyo a los efectos de encontrar un alivio para los jubilados que son acreedores del Estado nacional desde hace mucho tiempo.

Creo, señor presidente, que más allá de que se trate de un acuerdo fiscal o de la coparticipación federal de impuestos no estamos frente a un pacto federal como algún dirigente del oficialismo funcionario del Ejecutivo lo ha querido bautizar. No es un pacto federal sino, simplemente, un mero acuerdo transitorio de orden fiscal para procurar dar solución a los problemas de la clase pasiva.

Un pacto federal tiene que abarcar un sinnúmero de aspectos que hacen a las regalías petrolíferas, a las tarifas, a las transferencias de servicios, con sus respectivos financiamientos; es decir, todos los problemas que gravitan sobre los

presupuestos provinciales y que afectan sus recursos.

En este acuerdo, del cual procuro hacer un análisis objetivo, hay algunos aspectos que consideramos positivos. Otros no lo son. Por eso voy a hacer mención ahora de lo que considero es un paso adelante, dejando para el final lo que estimo no es una solución realmente satisfactoria, no sólo para las provincias sino para la salud institucional de la República.

Por ejemplo, es positivo que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales hayan acordado de un modo definitivo terminar con las disposiciones unilaterales que modifican la ley 23.548. Los propios gobernadores han señalado en reiteradas oportunidades que por vía de decreto se alteró el sistema de coparticipación federal de impuestos de un modo unilateral. Así ocurrió cuando a través de los decretos 559 y 701 se estableció disponer de fondos de la coparticipación para gastos operativos de la Dirección General Impositiva. De tal manera que es saludable este acuerdo por parte de los gobiernos provinciales y nacional para preservar la norma absolutamente "intocada" frente a lo que fueron decisiones inconsultas del Poder Ejecutivo que no contaban con el respectivo aval de las provincias.

Creemos que es positivo no alterar la base coparticipable toda vez que representa una garantía para las provincias que no van a ver disminuidos los recursos que luego son distribuidos entre los estados provinciales.

Asimismo, vemos como positivo que se mantenga el sistema de coparticipación primaria y de distribución secundaria como un modo para que las provincias puedan dirimir sus diferencias con la Nación y, posteriormente, para que ellas discutan cuál es la alícuota que les corresponde.

Vemos con buenos ojos que se haya resuelto la automaticidad del giro a las provincias de los fondos del FONAVI, del Consejo Federal de Agua Potable y del Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior, así como también del Fondo Vial Federal. Pero decimos que es correcto que se haya dispuesto el giro automático de estos fondos no obstante señalar en este recinto que se trata de una automaticidad que ya figuraba en las anteriores leyes. Ya había sido prevista tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados en oportunidad de sancionarse las respectivas normas. Entonces, esta automaticidad que se estableció en el acuerdo no es más que la ratificación de disposiciones legales surgidas del Poder Legislativo. Podemos mencionar como ejemplo

lo acontecido en oportunidad de modificarse el impuesto a los combustibles, donde se estableció taxativamente que la distribución de los fondos viales y eléctricos era automática.

También es elogiable que haya desaparecido el manejo discrecional de los fondos que siempre existieron para cubrir desequilibrios financieros en el interior. Antes se manejaban discrecionalmente mientras que ahora está perfectamente regulado con cifras determinadas para cada estado provincial, lo que representa una tranquilidad para los propios gobernadores que hasta ahora debían contar con el beneplácito o el apoyo del funcionario de turno a efectos de obtener fondos de ese fondo —valga la redundancia— para cubrir desequilibrios de esta naturaleza. Ahora, reitero, esto está perfecta y taxativamente determinado.

Además, este proyecto de ley que ratifica el acuerdo también deja planteada —es una iniciativa que hacemos nuestra— la necesidad, como decía inicialmente, de elaborar un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos.

No obstante, señor presidente, nos sumamos a las críticas que ya mereció este proyecto de ley en la Cámara de Diputados y agregamos algunas desde nuestra propia óptica.

Primero, a nuestro juicio consideramos que se deja un vacío grave —por otra parte, es heterodoxo desde el punto de vista financiero— al no hacer una afectación específica de la deducción del 15 por ciento de los fondos coparticipables. Sostengo esto porque el acuerdo que ratificaría este proyecto establece que dicho 15 por ciento deducible de la base coparticipable se utilizará para atender obligaciones previsionales y otros gastos operativos.

Las explicaciones que da el oficialismo señalan que estos gastos operativos serán para financiar administrativamente a la Dirección General Impositiva.

Pero todo esto, en términos de tal laxitud, no deja de provocar, a nuestro juicio con legitimidad, nuestros reparos al texto y a la conformación del proyecto tal cual ha venido redactado del Poder Ejecutivo. Y esto no pudo ser modificado en la Cámara de Diputados.

Cuando se habla de recursos para ser destinados al sistema previsional tiene que haber asignaciones específicas, como ocurrió con el impuesto a los combustibles, con los pulsos telefónicos o como cuando destinamos un porcentaje del producido de las privatizaciones para las cajas de jubilaciones. Ahora bien, en el caso de este 15 por ciento, la cifra rondaría los 235 mi-

lones de dólares, sin establecer cuánto iría para las cajas previsionales, a qué gastos operativos se refiere y qué porcentaje de estos montos serían los imputados a esos gastos operativos.

De tal manera que, en este tema, vamos a plantear nuestra observación o nuestro reparo y, si el oficialismo tiene buena voluntad, podrían establecerse límites a esta norma.

Pero, señor presidente, en todo el texto del acuerdo firmado por la Nación y las provincias se observa prácticamente con claridad el carácter impositivo, yo diría, del Poder Ejecutivo de la Nación sobre las provincias, que se ven prácticamente obligadas a someterse a las condiciones, requisitos y limitaciones que establece la Nación aprovechando las necesidades financieras que hoy tienen las provincias argentinas.

Creo, señor presidente, que aquí se desnaturaliza un poco el funcionamiento del sistema federal. No hay buen federalismo si no existe el federalismo económico. Si bien el federalismo político tiene trascendencia en el funcionamiento institucional de la República, debe existir uno auténtico en el orden económico y financiero. Y acá no existe como tal, ni aparece plasmado con absoluta claridad.

Por ejemplo, la Nación es la que controla y fiscaliza los planes de ajuste de las provincias, pero ellas no pueden hacer lo propio con la Nación.

Por ello, de todas las condiciones que han suscitado los gobernadores de provincias surge claramente que se allanan a una serie de reglamentaciones, requisitos y exigencias que establece la Nación respecto de las provincias. Pero ellas, en su calidad de socios del sistema federal, podrían hacer exactamente lo mismo con la Nación.

Y traigo un dato que se publicó hace unos días en un matutino de la Capital Federal, que indica que de las 34 o 35 secretarías de Estado que existían en la época del gobierno radical, en la actualidad hay más de 90. Esto habla de que el ajuste en el orden administrativo, el gasto público en el orden nacional, no se están respetando como se exige a las provincias en función de sus erogaciones en orden a la administración pública de los estados provinciales.

Entonces, no es un camino de ida y de vuelta. No funciona un sistema federal en donde los intereses de cada una de las provincias sumados da el interés de la Nación.

Por eso no dejamos de señalar con mucha preocupación este punto que es, de alguna manera, la filosofía en la que se asienta este acuerdo entre la Nación y las provincias.

No soy el primero que dice que las provincias aparecen firmando un acuerdo en función de sus necesidades financieras inmediatas abdicando, para el mediano y largo plazo, de conceptos y de principios elementales para la subsistencia de nuestro sistema federal en los órdenes financiero y económico.

Por ejemplo, señor presidente, se establece una cláusula por la que las provincias, si reciben más dinero de lo que se estime promedio respecto de lo que captarán por la coparticipación de impuestos —es lo que se denomina excedentes de coparticipación federal de impuestos—, no podrán gastarlo en lo que quieran, sino que deberán destinarlo exclusivamente a gastos de inversión, de capital o para pagar deudas. Me pregunto: si hay una mayor recaudación impositiva y, por lo tanto, también hay mayores ingresos en los estados provinciales, ¿cómo puede cercenárseles a las provincias la posibilidad de que gasten en salud, seguridad, educación?

Este acuerdo conmina a las provincias a destinar el excedente de la coparticipación exclusivamente al pago de deudas o a inversiones de capital. Por eso entendemos que no se concreta en la práctica, por parte del Poder Ejecutivo, ni se consagra un verdadero federalismo en el orden económico.

Señor presidente: creemos que la transferencia compulsiva de servicios nacionales a las provincias, como por ejemplo los referidos a las escuelas y a los ferrocarriles, sin el correspondiente financiamiento, no coloca a nuestros estados como verdaderos protagonistas de la historia, adoptando decisiones definitivas acerca de esos servicios que antes era de la Nación o que eran prestados por empresas públicas nacionales.

Las provincias no han sido consultadas acerca del programa de privatizaciones de empresas del Estado nacional. El Poder Ejecutivo no hace mucho tiempo vetó una ley por la cual se establecía la representación provincial dentro del ente regulador del gas. De un solo "plumazo" desapareció la intervención de las provincias en ese ente, de modo que ya no será posible la fiscalización o al menos el control de nuestros estados sobre sus actividades.

Del mismo modo, el Poder Ejecutivo vetó la transferencia de los terrenos de ferrocarriles a las provincias y a las municipalidades. Asimismo, vetó una ley por la cual se establecía el poder de policía y el contralor de la producción de hidrocarburos por parte de las provincias.

Tampoco ellas fueron consultadas a la hora de aprobar y poner en práctica el llamado "Plan Brady".

Señor presidente: con todo esto quiero señalar que el federalismo, por el que aboga la parte declarativa del acuerdo, no ha sido respetado ni remotamente por el Poder Ejecutivo nacional, a la luz de estos simples ejemplos que acabo de comentar.

Objetamos muy particularmente la cláusula cuarta de este acuerdo que, como dije, limita, condiciona o restringe la disponibilidad por parte de las provincias de fondos relacionados con los montos que exceden los promedios de coparticipación a que se refiere el acuerdo.

Voy a concluir mi exposición en general. Luego haremos algunas observaciones en particular, reclamando lo que venimos sosteniendo desde hace muchos años; no sólo desde que se inició este gobierno justicialista sino desde los primeros momentos de la gestión del doctor Alfonsín.

Me refiero concretamente a la necesidad de que en la Argentina se suscriba, entre la Nación y las provincias, un verdadero pacto federal económico. En la medida en que no exista ese gran acuerdo, en el que debieran estar incluidos los temas de regalías petrolíferas, gasíferas y uraníferas, de tarifas especiales de electricidad, de los servicios transferidos a las provincias con su correspondiente financiamiento y de los créditos y deudas recíprocas entre ambas partes, es evidente que no habrá un verdadero pacto federal en materia económica.

Es indispensable que en ese gran acuerdo también se incluya un tema que es capital; me refiero a un adecuado régimen de coparticipación federal de impuestos.

En fin, en la medida en que no exista ese acuerdo económico integral no vamos a tener la seguridad ni la certeza de estar viviendo en medio de un sistema federal en el orden económico.

Sucede que la disputa no es solamente entre las provincias y la Nación. Hoy hay disputas entre las propias provincias; esos forcejeos y pujas de intereses entre ellas son aprovechados por el poder central que se convierte así, tanto en este gobierno como en los de otras épocas, fundamentalmente en los de facto, en el gran árbitro de las decisiones económicas referidas a los recursos de las provincias.

Y es entonces cuando vuelve a recrearse la formación de un centralismo que es el que quiebra

la administración de un sistema federal en el orden nacional.

Por eso lo dijimos durante el anterior gobierno constitucional y lo reiteramos ahora: esto que estamos tratando es un mero parche impositivo detrás de un noble objetivo, como es obtener fondos para las cajas previsionales, pero no pasa de ser una solución meramente coyuntural y circunstancial que está muy lejos de resolver las grandes controversias y conflictos entre las provincias y la Nación e, incluso, entre las propias provincias.

Bien señalaba recién el señor senador justicialista por San Luis que tratamos de mejorar este proyecto de ley recogiendo incluso sugerencias de gobernadores de distintos signos políticos, que actualmente administran estados provinciales. Y vamos a proponer cuatro modificaciones concertadas entre los bloques de esta Cámara a efectos de mejorar el proyecto que estamos tratando. Esto, por supuesto, sin perjuicio de que las diferentes bancadas —concretamente, la de la Unión Cívica Radical— formulen otro tipo de propuestas de modificación que no han contado con el consenso del bloque de la mayoría.

Las modificaciones que hemos concertado están destinadas en primer lugar a salvaguardar las facultades constitucionales que tiene el Congreso para actuar legislativamente, no aceptando solicitudes como la de este caso, de tratar ciertos y determinados temas.

Además, vamos a sugerir tres modificaciones que tienden a dar un destino específico al FONAVI y a los fondos del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento, del Fondo Vial Federal y del Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior. En ese sentido establecemos que los gobiernos de provincia no podrán apartarse de lo que determinen las leyes respecto de esos fondos.

Asimismo, señor presidente, vamos a incorporar una norma por la cual todo lo referido a la facultad reglamentaria sobre los fondos cuyo destino sean viviendas del FONAVI, en particular sobre la aprobación de proyectos, su factibilidad técnica y financiera, queda en la órbita de los gobiernos provinciales y no del Estado nacional. Esto es así porque se ha dado el caso, señor presidente, de que el acuerdo entre la Nación y las provincias hasta el día de hoy no ha hecho que se gire un solo centavo a los gobiernos provinciales en concepto del FONAVI.

Por otra parte, señor presidente, como bien lo señaló hace unos instantes un señor senador,

vamos a sugerir que los giros automáticos correspondientes a esos cuatro fondos no sean efectivos a partir de la ratificación de la ley sino de la suscripción del acuerdo. De esta manera las provincias podrán reclamar todos aquellos recursos de los que pudo haberse dispuesto irregularmente a partir de la suscripción del citado acuerdo.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra la señora senadora por Catamarca.

**Sra. Saadi de Dentone.** — Señor presidente, señores senadores: en el marco de los objetivos enumerados en la parte introductoria del acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, resultan de especial atención aquellas cuestiones tendientes a asistir a las necesidades sociales básicas, especialmente las vinculadas con el sector pasivo —primer apartado— y las referidas a avanzar en el camino del federalismo reconociendo el creciente papel de los gobiernos provinciales y municipales en la atención de las demandas sociales de la población —segundo apartado—.

Los restantes enunciados del acuerdo, tales como aquellos de garantizar la estabilidad económica y facilitar el acceso a la vivienda, por la globalidad de sus expresiones y por el sentido común que se trata de poner en las acciones, no pueden más que ser compartidos por todos los argentinos.

El presente acuerdo o pacto es susceptible de dos o más lecturas. En el marco estrictamente institucional, aunque algunos rememorando épocas que hacen a la configuración de la Nación hablen de pactos, en nuestro pensamiento y leyendo su texto tan sólo fluye una suspensión temporaria —diría yo— de una determinada serie de leyes, tales como la 23.548, la 21.581, la 23.615, entre otras.

Desde el punto de vista político el documento no constituye un pacto sino que es un mero renunciamento temporario de las provincias argentinas hacia la Nación, a fin de sofocar los reclamos sociales de un sector de la población.

Esta afirmación se fundamenta en la circunstancia de que las provincias argentinas no han participado en el mismo. Las legislaturas se encontraron totalmente ausentes; y están tan ausentes que en la cláusula 9ª del acuerdo se establece la aplicabilidad automática de lo convenido, sin perjuicio de la intervención a posteriori de cada legislatura.

Firmen los gobernadores, cedan recursos de los estados provinciales hacia la Nación y luego cada uno legitime sus actos, esto es un mero

acuerdo entre los poderes ejecutivos: la Nación y los gobernadores; pero no de la entidad política que requiere un acuerdo entre la Nación con las respectivas provincias argentinas.

No cabe duda, señor presidente, señores senadores, de que la totalidad de los legisladores presentes, sin distinción de banderías ni ideologías políticas, coinciden con los objetivos enunciados en los apartados primero y segundo del acta. A pesar de que la gran masa de jubilados son competencia de la Nación, ya que son acreedores de las cajas manejadas por el Estado nacional, hoy todos y cada uno de los argentinos somos deudores de la clase pasiva, estamos obligados a su pago, sin distinción de jurisdicción o sectores políticos. Las deudas morales no deben reconocer bandera de ningún tipo.

En este caso, las provincias renuncian al 15 por ciento de la masa coparticipable. De acuerdo con el inciso a) de la cláusula primera del acuerdo, el 15 por ciento será destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales y gastos operativos.

Me pregunto: ¿qué porcentaje se utilizará para cada finalidad?

Señor presidente: espero que esta cuota de sacrificio de todas las provincias argentinas no termine desviada para la atención de la burocracia nacional.

Esta reflexión se encuentra íntimamente ligada con el análisis de la cláusula cuarta, por la que las provincias se limitan en las denominadas erogaciones corrientes a financiarlas con recursos coparticipables, no existiendo contrapartida de autolimitación por parte de la Nación en los gastos operativos respecto del sistema previsional.

Ahora bien, abandonando el marco de las necesidades básicas, yo diría, señor presidente, que debemos detenernos en el apartado segundo, que promulga el afianzamiento del federalismo sobre la base del reconocimiento del papel de los gobiernos provinciales en la atención de las demandas sociales. En efecto, el Poder Ejecutivo nacional ha transferido a la órbita de los gobiernos provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la atención de las prestaciones médicas y educacionales.

No cabe afianzar el federalismo mediante actas sino a través de la creación, por parte de la Nación, de las condiciones económicas para que los estados provinciales puedan afrontar los gastos que ésta les ha transferido. En caso contrario y siguiendo la línea de transferencias de responsabilidades, en un determinado momento

llegaremos al extremo de que cada ciudadano tendrá que contribuir en forma directa a la atención de la escuela a la que pertenece o al hospital de su barrio.

No quisiera creer que, bajo el ropaje de legalidad y el mutuo acuerdo, por medio de esta acta se logren sanear actos del Poder Ejecutivo nacional como los decretos 559 y 701 del presente año, por los cuales en forma unilateral se ha dispuesto que la DGI perciba el 2 por ciento de la masa de coparticipación. El mismo ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos ha reconocido la ilegalidad de este accionar al manifestar —según queda establecido en la segunda cláusula del acuerdo— que las sumas percibidas no serán objeto de reintegro alguno.

En el marco de las inquietudes que acabo de presentar no puedo dejar de comentar en este recinto la actitud del gobernador de mi provincia, señor Arnoldo Castillo. Jamás, en ninguna instancia de la discusión del acuerdo en cuestión, formuló consulta o propuesta alguna a los dos legisladores que ocupamos sendas bancas en esta Cámara. Remarco que no se trata de una cuestión de banderías políticas sino de la legítima necesidad de defender los intereses provinciales, tarea para la cual he sido elegida. Me pregunto si a muchos de mis pares les habrá ocurrido lo mismo.

En declaraciones publicadas el 11 de agosto, es decir, un día antes de la firma de este pacto, el gobernador de Catamarca sostuvo que la propuesta era perjudicial para nuestra provincia y la Legislatura, en declaración conjunta de ambas cámaras y por unanimidad, dio a conocer su posición por la cual exhorta al Poder Ejecutivo nacional a que se abstenga de realizar cualquier acto que implique comprometer o alterar el régimen establecido en la ley provincial 4.521, que adhiere al régimen de coparticipación federal.

Quiero dejar bien en claro la reivindicación de los jubilados y mi deseo de beneficiarlos. Pero también en mi provincia hay jubilados, amas de casa y jubilaciones de amas de casa. Debido a esto y con profundo dolor debo decir a mi gobierno que, cumpliendo con el mandato de la Legislatura de mi provincia —la cual, como dije, se expidiera por unanimidad al respecto—, votaré negativamente este proyecto de ley.

**Sr. Amoedo.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Romero Feris.** — Señor presidente, señores senadores: éste es un tema que hace a la relación entre la Nación y las provincias.

Los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra hicieron manifestaciones con relación al acuerdo firmado, a la vigencia del federalismo, a la coparticipación federal, a la descentralización de aspectos que sin duda alguna tienen trascendencia fundamental en la vida del país —especialmente en lo que se refiere al manejo y desenvolvimiento de las provincias argentinas— y a ese federalismo del que hablamos permanentemente pero que en la práctica no lo llevamos a cabo por diversas circunstancias. Pero éste no es un problema actual pues creo que tiene vieja data.

Por estas razones, desde que me incorporé a este honorable cuerpo, sin ningún lugar a dudas me ha preocupado fundamentalmente la coparticipación federal de impuestos. Los problemas derivados de esta cuestión los viví y experimenté personalmente porque durante mi gestión de gobierno en la provincia de Corrientes —de 1983 a 1987—, a pesar de las diversas manifestaciones que hoy se hacen, no contamos con una ley de coparticipación que nos permitiera —como decía el señor senador por Mendoza, del bloque radical— recibir directamente los fondos de la coparticipación federal.

Sobre el particular, incluso en reiteradas oportunidades he tratado de hacer un replanteo general, tal como lo solicité varias veces en este recinto. Por ejemplo, aquí se aprobó un proyecto de mi autoría por el que se disponía constituir una comisión integrada por los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y por representantes del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, pero lamentablemente nunca se constituyó ni pudo llevar a cabo actuación de ningún tipo.

Por otra parte, también quiero decir que Corrientes ha sido perjudicada. No digo esto por ser la provincia a la que represento, ya que creo que muchas otras están padeciendo los mismos males. Pero, evidentemente, Corrientes vive hoy una situación muy especial como consecuencia de la intervención de la que ha sido objeto, por la situación especialísima de sus instituciones y por haberse avasallado la autonomía provincial.

En consecuencia, Corrientes ha sido perjudicada —notoriamente perjudicada diría yo— en la asignación de fondos por parte de este convenio-acuerdo suscrito entre la Nación y las provincias, en cuya negociación prácticamente no ha participado.

También fue perjudicada, como lo dijimos en su oportunidad, cuando se sancionó la ley

23.548, ya que se redujo a un mínimo histórico el porcentual correspondiente a la provincia que represento, situación que permanentemente planteamos y que quisimos revertir sin éxito de ninguna naturaleza.

Hoy llega a este Senado para su ratificación con alcance de ley el citado acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, ya sea a través de los gobernadores o de sus representantes, dado que también lo hicieron algunos vicegobernadores. Quiero destacar que el interventor federal de mi provincia no participó de estas tratativas; creo que ni siquiera firmó dicho acuerdo, que por cierto resulta más que perjudicial a los intereses de Corrientes, que así virtualmente ha carecido de participación en el mismo, siendo insuficientes para su modificación los reclamos y rechazos efectuados por nuestros diputados nacionales en la Cámara respectiva en el Congreso de la Nación.

Este proyecto ha sido tratado sobre tablas en la Cámara baja y debo decir, señor presidente, con total sinceridad, que fue impuesto, de alguna manera, por presión del gobierno nacional y que, en definitiva, más que responder a una cuestión que hace a la situación de la clase pasiva y de las provincias, obedece a los propios intereses del gobierno nacional.

No fue motivo de análisis y consulta con los representantes de las provincias, en este caso, el señor senador Aguirre Lanari y quien habla. Nosotros no tuvimos en absoluto conocimiento de las tratativas y de las formas en que se llevaba a cabo este acuerdo ya suscrito. Incluso, esto ha quedado planteado ayer por nosotros en la reunión de presidentes de bloque.

Creo que no hay condiciones técnicas que justifiquen las cifras o porcentuales que allí se consignan; es más, creo que ni siquiera se examinó ni aprobó el denominado acuerdo complementario —por lo tanto integrante del principal— firmado con otras provincias, en donde se afectan fondos de las sumas asignadas a aportes a ayudas del Tesoro nacional.

En este sentido, creo que en este momento, en este instante, es necesario remarcar que además de la forma en que se les requieren los recursos a las provincias para solucionar problemas de la Nación, también es necesario solicitar que el gobierno nacional, el gobierno central, nos muestre el camino del ajuste, como decía el señor senador por Mendoza.

Presenté un proyecto hace pocos días referido al tema. De treinta o más de treinta subsecretarías

se ha llegado a noventa y ocho. Entonces, ¿cómo es posible que con una Secretaría de Reforma del Sector Público Provincial en el Ministerio del Interior, que monitorea a los gobiernos provinciales, se esté solicitando el ajuste permanente y un gran esfuerzo al interior del país? Quiero conocer cuál es el criterio que sigue el gobierno nacional para achicar sus gastos y hacer el ajuste correspondiente.

También considero —y estoy casi convencido de ello— que los gobernadores y vicegobernadores que firmaron dicho acuerdo no tuvieron libertad de acción ya que, de algún modo, fueron forzados a suscribir el documento. Esto lo digo por una razón muy especial: son demasiado importantes las diferencias que existen con las propuestas que poco antes formularon en el Consejo Federal de Inversiones —CFI— los representantes de catorce estados provinciales.

Por eso, señor presidente, los recursos previstos en varias de las leyes que hemos votado —presenté alguno de esos proyectos— después fueron desviados a "Rentas generales" para solucionar el problema del sector pasivo; por ejemplo, el impuesto a la importación, el tema de los combustibles, el de los pulsos telefónicos, el de las privatizaciones, entre otros. Y estos fondos, que en algunos casos habían sido aprobados por ley, fueron desviados por decreto. Por ese motivo no se puede solucionar en ningún caso este tema afligente, tan preocupante e importante que es lo que aqueja al sector de los jubilados, de los pasivos del país. Si las cosas hubieran sido de otra manera, esta cuestión ya se habría solucionado. Espero que en estas circunstancias se logre un arreglo definitivo, aunque tengo dudas al respecto.

Tendría mucho que decir sobre este tema pero no quiero extenderme en otras consideraciones porque hay muchos señores senadores que desean hacer uso de la palabra. No obstante, quiero dejar sentada mi posición. En razón de este evidente despojo que significa para mi provincia, la de Corrientes, hoy avasallada por el poder central en forma violatoria de la Constitución Nacional, la aplicación de este documento que se ratifica por el artículo 1º de la iniciativa que consideramos, manifiesto mi rechazo total al mismo. Y para no extenderme —como dije—, solicito la inserción en el Diario de Sesiones del resto de mis manifestaciones, con el fin de facilitar la intervención de los otros señores senadores. En este texto hago un análisis pormenorizado que ya desde el comienzo del régimen de coparticipación federal en el año 1935, cuando se

sancionó la ley 12.139. He volcado, además, una serie de cifras comparativas entre provincias similares en población, en economía y en cuanto a su estructura en general.

Finalmente, dejó en claro mi posición en contra del proyecto de ley que consideramos.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Oraldo N. Britos.

**Sr. Posleman.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Posleman.** — Estamos considerando este proyecto de ley que ha sido sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación, por el cual se aprueba el acuerdo entre la Nación y las provincias que ha sido denominado por la prensa y por importantes funcionarios del gobierno —y firmado pomposamente en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno— como pacto federal. Lo hemos denominado "el pacto antifederal" porque significa un avasallamiento de las autonomías provinciales, porque es atentatorio del sistema institucional del país y constituye una grave distorsión del funcionamiento y de las facultades de cada uno de los poderes del Estado, de la Nación, y también de los estados provinciales.

Esta improvisación, este nuevo método de manejar a las provincias, señor presidente, va a traer graves consecuencias en la relación entre éstas y la Nación con respecto al sistema institucional.

Así como han sido planteadas las cosas, en que luego del avasallamiento que significa el dictado de decretos que reforman y derogan leyes, estos nuevos decretos-ley que ha adoptado a manera de estilo el gobierno nacional —muy parecidos a los decretos ley que muchos demuestran de otras épocas de gobiernos de facto que ha vivido la República— están distorsionando cada una de las facultades que tienen los distintos organismos de la Nación.

Estamos atropellando las facultades de las legislaturas. Los gobernadores se atribuyen por este pacto la facultad de disponer de los recursos provinciales. Esto no es así, señor presidente. Cada una de las constituciones provinciales establece con claridad que la facultad impositiva, de disponer y dar destino —esto es, en qué se van a gastar los recursos financieros con que cuentan—, es potestad de las legislaturas provinciales. En este caso, con la concreción de este acuerdo en modo alguno han tenido participa-

ción, con la única salvedad del conocimiento proveniente de la información periodística. Además, en la mayoría de los casos se han pronunciado en contra de esta nueva metodología para tratar los temas de importancia para la Nación.

Cuando decimos que se están violando las facultades de las legislaturas advertimos que en ningún lugar, ni en el acuerdo ni en la sanción legislativa que estamos considerando, se plantea la alternativa del rechazo por parte de las legislaturas, rechazo al que tienen derecho porque son los únicos organismos con atribuciones para disponer de los recursos provinciales. Pero esto, señor presidente, me hace recordar la ley del embudo: aquí lo ancho es para la Nación y lo angosto para las provincias.

Los gobernadores se han visto compelidos, obligados a firmar este acuerdo. Es lamentable el hecho de que, en algunos casos, quienes manifestaron públicamente estar en contra del acuerdo luego terminaron aplaudiéndolo como si esto fuera lo mejor y la solución para las provincias.

No creo en estos cambios tan fundamentales. Lo que sí creo es que por un acuerdo entre la Nación y la principal provincia del país se ha llevado a los gobernadores a una situación de hecho: no tuvieron otra alternativa que aceptar o aceptar este acuerdo, corriendo el riesgo importante de ver que se siguieran deteriorando las finanzas provinciales por la aplicación de métodos ilegales como el de los decretos dictados a los que me voy a referir más adelante.

Evidentemente, en el contenido de este acuerdo hay una venta de ilusiones y una desigualdad absoluta entre la Nación y las provincias. Si analizamos las cláusulas del acuerdo observamos que los beneficios para la Nación —es decir, esta retención del 15 por ciento de la masa coparticipable— no tienen límite en cuanto a su vigencia; es algo que dura para siempre; no se ha establecido cuándo va a caducar esta detracción de los recursos provinciales. En cambio, todos los beneficios emergentes del manejo de los fondos así como otras garantías que se han establecido para las provincias tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del año próximo.

Esta es una muestra palpable de la situación de desigualdad en que los gobiernos provinciales han negociado este acuerdo con los ministerios de Economía y Obras y Servicios Públicos y del Interior de la Nación. Se ofrece a las provincias un piso, un mínimo de coparticipación. Pero, señor presidente, si esto es para el caso en que la

recaudación caiga a niveles que hagan imposible cumplir con este fondo, con este piso mínimo, ¿cómo va a cumplir la Nación si no tiene los recursos? ¿De dónde los va a sacar? Esto también implica un argumento de venta —por llamarlo de alguna manera— para que sea digerible este acuerdo, que es totalmente contrario a los intereses de las provincias.

También se ofrece distribuir 43.800.000 pesos mensualmente entre las provincias para resolver sus déficit de tipo financiero y estructural. Pero, ¿qué reparto es éste, señor presidente, si se trata de los mismos recursos que corresponden a las provincias? Esto se toma de la masa coparticipable y se entrega a las provincias. ¿Qué les están vendiendo? Les están vendiendo un argumento para poder presentar sin vergüenza ante los ciudadanos de las provincias este tipo de acuerdo.

Con respecto a otras de las concesiones de la Nación, me da vergüenza hablar, señor presidente, porque siento vergüenza de que en mi país federal regido por una Constitución como la nuestra los gobernadores tengan que firmar un acuerdo y poner por escrito, sin temor a hacerlo, que la Nación se compromete a no seguir distraendo en forma ilegal fondos de la parte que corresponde a las provincias. Ocorre que hay una cláusula expresa que dice que no se van a tomar más fondos de las provincias.

Pero no sólo se trata de este punto, en el sentido de que lo deban aclarar por escrito, sino que en el momento mismo de la firma hay vigente un decreto, el 579, un decreto ley al estilo de los del actual gobierno nacional, por el que se modifican las leyes del IVA y del impuesto a las ganancias, quitando a las provincias el 20 por ciento de la recaudación de este último. Y sobre este decreto no se dice nada en el acuerdo.

Además, lo que se dice de los decretos 339 y 701 es mentiroso, señor presidente, porque se trata del compromiso de derogarlos. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esta derogación cuando por el mismo acuerdo estamos diciendo que las sumas que ha retenido ilegalmente la Nación deben quedar para ella, que las provincias se comprometen a renunciar a los juicios que con todo derecho hayan iniciado —todavía cargando con las costas que les correspondan— dejando los fondos en la Nación?

En otra cláusula del acuerdo se dispone que el 15 por ciento será destinado al Régimen Nacional de Previsión Social. Se dice "y otros gastos operativos", frase en donde está contenida, sin ningún monto ni límite, la posibilidad de dis-

traer la ayuda que supuestamente estamos dando a los jubilados para financiar a la DGI, como se ha venido haciendo de acuerdo con los decretos 339 y 701. Con el agravante, señor presidente, de que las provincias ni siquiera sabrán cuál será el beneficio para los jubilados ni cuánto se destina realmente a financiar el régimen de la Dirección.

Ocorre que con este acuerdo nos estamos apartando del sabio sistema que había establecido la ley 23.548. Esta norma creaba un organismo que fiscalizaría y controlaría la distribución de esos fondos. Como hoy se retiran esos montos de la masa a distribuir, las provincias ya no podrán ejercer el control de ese organismo a través de sus representantes.

Señor presidente: son innumerables los avasallamientos y atropellos que se hacen respecto de las autonomías provinciales. Por este proyecto de ley se compromete a las provincias a asignar sus recursos de una determinada forma, impidiendo así el crecimiento de sus presupuestos y la mejor prestación de servicios de seguridad, de educación y otros esenciales que hoy no están en condiciones de atender en función de los escasos recursos de que disponen.

Cuando decíamos que este proyecto de ley que aprobó Diputados significa una grave distorsión del sistema institucional es porque advertimos que en su articulado se introducen aspectos sumamente negativos.

En efecto, el artículo 1º del proyecto ratifica el acuerdo firmado; el inciso a) del artículo 2º establece que a partir del 1º de septiembre de este año se suspenden las leyes que se oponen al acuerdo arribado, por el término establecido. Se mencionan expresamente la ley 23.548, de coparticipación federal, y las referidas al FONAVI, al COFAPyS y al FEDEL. También se suspende el decreto ley 305/58, referido al Fondo Vial Federal.

La función del Congreso Nacional es modificar estas leyes, cumpliendo los acuerdos e interpretando cabalmente cuáles deben ser las disposiciones que hay que cambiar para que dicho acuerdo entre la Nación y las provincias pueda funcionar adecuadamente.

Sin embargo, ya están surgiendo los primeros inconvenientes. El gobernador de mi provincia nos ha hecho llegar una comunicación por la cual se pide que se establezcan aclaraciones sobre el manejo de los fondos de vivienda, dado que la burocracia de la Secretaría de Vivienda está interpretando que se trata de una mera transferencia formal y que los fondos van a seguir

siendo manejados, en cuanto a planes y a cuestiones financieras y técnicas, por los organismos que actualmente lo vienen haciendo. De manera que cuando se haga el pedido de aclaración en tal sentido, haremos oír nuestra opinión al respecto.

No quiero terminar esta exposición sin hacer algunas referencias explícitas a las cláusulas del convenio, evitando así intervenir nuevamente durante la consideración en particular.

El convenio está encabezado por una declaración de puntos u objetivos básicos que, si los analizamos, obviamente nadie puede discutirlos. Sin embargo, a partir del texto de la cláusula primera del acuerdo, es evidente que estas disposiciones están en una contraposición total con los objetivos que allí han sido mencionados.

Decimos que todas las facultades o beneficios están a favor de la Nación. En la cláusula quinta, quinto párrafo, se establece la formación de una comisión que van a integrar representantes de los poderes ejecutivos de todas las provincias y, por supuesto, del Poder Ejecutivo nacional, y que elaborará otro acuerdo, con lo que se pretende modificar las leyes de fondo específicas a que se hace referencia. Esto también es avanzar sobre las facultades del Congreso Nacional.

En la cláusula sexta se vuelve a hacer una declaración por la que se establece que no se van a detraer de la masa coparticipable nuevos porcentajes o montos adicionales y que no se van a transferir nuevos servicios sin la conformidad expresa de las provincias.

Señor presidente: este pacto o acuerdo es un paso más en un largo camino que ha emprendido el Poder Ejecutivo nacional bajo la inspiración del actual ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, que ha decidido apropiarse de los fondos que pertenecen a las provincias, cualquiera sea la metodología que deba emplear, sin modificar la ley de coparticipación federal por medio de los mecanismos institucionales correspondientes.

Así lo ha venido haciendo con la transferencia de los servicios nacionales, tanto escolares como de sanidad. Esto significó restar alrededor de un 8 por ciento de coparticipación a las provincias, al transferirles, sin hacer la asignación de los recursos pertinentes, obligaciones que no les corresponde atender.

También estamos convalidando el financiamiento de la Dirección General Impositiva. Y debo recordar lo que ocurrió con los fondos de combustibles y del FONAVI, que fueron reducidos mediante reformas anteriores.

En definitiva, señor presidente, queremos dejar sentado que este procedimiento no le hace bien a la República y menos a la relación entre la Nación y las provincias. Los argentinos debemos volver a nuestro sistema institucional. Los argentinos debemos afianzar el federalismo, pero no con palabras ni con promociones publicitarias; tenemos que hacerlo con hechos concretos.

Nuestro partido traicionaría una tradición de más de setenta años en defensa de las autonomías provinciales si votáramos afirmativamente este proyecto de ley. Por estas razones, señor presidente, vamos a votar en contra del proyecto en consideración.

**Sr. Presidente** (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Brasesco**. — Voy a expresar en forma clara y concisa los motivos por los cuales rechazo la sanción de la Cámara de Diputados por la que se ratifica el acuerdo sobre el financiamiento del sistema previsional y la distribución de fondos coparticipables.

El 12 de agosto de 1992 los gobernadores de las provincias suscribieron un acuerdo que vino para su ratificación al Congreso Nacional en cuanto a lo que hace a su competencia.

Por este proyecto de ley con sanción de la Cámara de Diputados se ratifica en su artículo 1º el acuerdo, se suspende la ley de coparticipación federal, número 23.548 y se adaptan los regímenes de las leyes 21.581 —FONAVI—, 23.615 —COFAPyS—, 15.336 —FEDEI— y el decreto ley 505/58 —Fondo Vial Federal—. Y por ello se autoriza, señor presidente, al Poder Ejecutivo nacional a modificar el presupuesto, a prorrogar la fecha de corte establecida en la ley 23.982 respecto de las deudas previsionales, a cuyo fin se considerarán las que hayan vencido o sean de causa o título anterior al 31 de agosto de 1992. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a suscribir el acuerdo.

El acuerdo establece objetivos para realizar acciones concurrentes que esencialmente son dos. En primer lugar, asistir las necesidades sociales básicas, específicamente las relacionadas con el sector pasivo y, en segundo término, profundizar la reforma del sector público.

¿Cómo se realiza esto? Se detrae el 15 por ciento más una cifra fija de la masa coparticipable y se lo destina al pago de obligaciones previsionales y a "otros gastos operativos que resulten necesarios".

Esta expresión literal es un cheque en blanco. Nos preguntamos: ¿necesario para qué? Para lo

que el Poder Ejecutivo juzgue. ¿En qué medida? En la que este poder lo estime necesario.

Verbalmente los tenedores de libros, del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos han dicho que esta expresión contiene como intención financiar los gastos de recaudación; que por esta vía viene lo que se intentó por decreto. Pero indudablemente la frase "...y otros gastos operativos que resulten necesarios" es una hermosa paloma que se deja a disposición del ministro de Economía para cuando necesite dinero.

La cifra fija consiste en la suma mensual de 43.800.000 pesos que se distribuyen para desequilibrios fiscales de la siguiente manera: Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, tres millones de pesos a cada una; Río Negro, La Pampa, Neuquén y Salta, 2.500.000 pesos cada una; Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Mendoza y San Luis, 2.200.000 pesos cada una; Entre Ríos, 1.900.000 pesos; para atender los costos de los servicios ferroviarios, 500.000 pesos a Córdoba y otro tanto a Santa Fe.

¿Qué otras medidas agrega? Que el Poder Ejecutivo nacional derogará los controvertidos decretos 559/92 y 701/92. Pero por supuesto la mentalidad de alcancía del Ministerio de Economía no reintegrará las sumas percibidas hasta ese momento en virtud de dichos decretos.

En la cláusula tercera, el Poder Ejecutivo garantiza un ingreso mensual mínimo de 725 millones de pesos de coparticipación total. Actúa bimestralmente compensando en más o en menos. Dicha cláusula de garantía tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993. —

En la cláusula cuarta se limita el incremento de gastos corrientes. Durante 1993 no podrán ser financiados los gastos corrientes con recursos coparticipables si exceden del 10 por ciento de lo efectivamente erogado en 1992, incluyendo los servicios transferidos. Se fija a dicho efecto un monto total coparticipable de 10.890 millones y se establece que todo excedente sólo podrá destinarse a cancelar deudas previas al acuerdo y a financiar erogaciones de capital.

Los fondos del FONAVI, COFAPyS, FEDEL y Vial Federal se giran automática y directamente. Como contrapartida quedan compensadas las deudas mutuas.

Asimismo, quedan sin efecto los juicios referidos a la impugnación de los decretos 559 y 701 del '92 o las provincias se abstienen de iniciarlos en el futuro.

Por otra parte, se solicita al Congreso la sanción de distintos proyectos de ley, a lo que ya se han referido el señor senador por San Juan y otros señores senadores.

Los gobiernos provinciales se comprometen a solicitar a sus legislaturas presupuestos equilibrados y a firmar los acuerdos de transferencia de servicios. Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional se compromete a garantizar su financiamiento.

Se expresa también que la vigencia de este convenio será hasta el 31 de diciembre de 1993, pero el descuento del 15 por ciento corre hasta tanto no haya una nueva ley de coparticipación.

¿Qué significa para nosotros esta ley? Detraer financiamiento destinado a las provincias para adjudicar al sistema previsional el 15 por ciento de la masa coparticipable. Esto representa aproximadamente 235 millones de pesos mensuales.

Se ha dicho que esto sirve para pagar el 82 por ciento. O se hicieron mal los cálculos, o enviaron mal el mensaje, o intencionalmente abrieron un paraguas cautivo en materia de extorsión hacia los señores gobernadores, porque con el monto que se quita a las provincias no se paga este 82 por ciento.

Para los jubilados hay aumentos de diez, veinte, treinta, cuarenta y, en algunos casos, cincuenta dólares o pesos. No se aumentan los mínimos y todo el sector de autónomos queda marginado, circunstancia por la cual el sacrificio que hacen las provincias con este 15 por ciento no sirve para lo que se ha dicho. Ese 15 por ciento que se arranca a las provincias es necesario para afrontar los gastos ordinarios de sus presupuestos, para el financiamiento de la escuela primaria gratuita, para atender las necesidades de salud, para la administración de justicia.

Repito que esto no sirve para la motivación prevista. En cambio, sirve de título a este acuerdo. Esto no lo dice el senador que habla sino que fue expuesto por los hombres del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo; ya se han dado explicaciones sobre este particular.

Tampoco se paran los juicios en trámite, ya que sólo habría pagos parciales. Si bien es cierto que el sistema acumula menos deudas, los juicios no se paran en su trámite.

Se dice que las finanzas nacionales mejoran y seguramente el ministro de Economía debe haberse puesto muy contento y habrá tomado champagne cuando firmó esto. Pero por más que la recaudación haya aumentado —y hablo sobre

la base de los informes del Ministerio de Economía — todavía no quedan cubiertas las exigencias o las metas que se han impuesto.

Las últimas ventas de activos se están realizando en el curso de este año. Pero hemos firmado el Plan Brady que nos impone pagos importantes vinculados con la recaudación. Indudablemente, este acuerdo mira estos acontecimientos y no el sistema previsional. Han ido hacia las provincias, que son las variables de ajuste, a hacer un acuerdo de débiles con poderosos, un acuerdo que está viciado de nulidad porque ha sido firmado por necesidad.

Las mejoras de las finanzas nacionales y la obtención de recursos adicionales para pagar obligaciones previsionales se obtendrán del retiro de juicios a la Nación por parte de las provincias. Así, se obtendrán unos 60 millones de pesos para el gasto operativo de la DGI y unos 43 millones para el fondo de desequilibrio provincial. Pero las finanzas provinciales caerán, pues el gobierno federal en vez de accionar para reducir la evasión recurre al trámite más fácil de detraer fondos de la masa coparticipable.

Además, quiero decir lo siguiente. De acuerdo con las disposiciones de la ley de empleo se pretende el blanqueo de los trabajadores en negro, algo necesario con lo que estamos todos de acuerdo, pero siempre que se creen motivaciones para que esto sea posible. Porque a través de esa norma, en definitiva, han sido premiados los empleadores que denuncien voluntariamente a un trabajador en negro, ya que en ese caso estarán liberados del pago de la deuda previsional. Pero evidentemente, el pago lo hace el sistema. Mientras esto ocurra y hasta tanto no aumentemos los inspectores, la situación no va a cambiar. Y aquí es justo decir que éste no es un problema de ahora sino que viene de arrastre desde hace mucho tiempo. En efecto, la Dirección Nacional de Recaudación Previsional viene siendo castigada desde hace varios años con la retracción de empleados para realizar inspecciones. Inclusive se dejó sin efecto la participación del sector pasivo para llevarlas a cabo y poder aumentar la recaudación.

Asimismo, hay que tener presentes los créditos de previsión social, como los que derivaban de ENTel, cuya interventora, en vez de derivar el dinero donde correspondía, pagó deudas que tenía la citada empresa, perpetrando por lo menos —hipotéticamente— una malversación.

El proyecto de ley en consideración, por el cual se ratifica el acuerdo, representa una intromisión del gobierno federal en las finanzas de las provincias porque impone límites a los gastos co-

rrientes, presupuestos equilibrados, renunciar a juicios y perder el debido reintegro y financiar el sistema federal de recaudación. Es decir que las provincias han condicionado la caída de sus ingresos a un ingreso mínimo garantizado, a que el gobierno nacional no detraiga más fondos coparticipables que los autorizados en el acuerdo, al giro automático de los fondos especiales —en conjunto los fondos están más o menos en los 900 millones de pesos anuales y se afecta a Economía, que suele retirar fondos y a Acción Social, que suele “manejarlos”—, y a una suma fija con repartos diferenciados.

Este esquema reconoce tres provincias fuertes afectadas indirectamente, que son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Estas dos últimas salvan en parte la regresividad con los 500 mil dólares o pesos con cargo al costo de los servicios ferroviarios.

¿Por qué decimos que hay una intromisión del gobierno federal? Porque éste es el acuerdo de los débiles con los fuertes. Evidentemente, estamos en un sistema federal —nos guste o no— donde los presupuestos de las provincias son responsabilidad de sus representantes; es la Legislatura quien fija los cálculos de gastos y recursos.

Aquí el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos se convierte en el “fondo monetario del interior de la República Argentina”. Esta es una verdadera auditoría, una auténtica invasión macabra en que se va a mirar los libros a las provincias. Y eso no está bien.

Sé que cualquier gobierno quiere —y lo sé por experiencia, porque también fuimos gobierno— que en la lucha contra la inflación, en los planteos por la estabilidad económica, en la necesidad de la contracción del gasto, las provincias sean responsablemente serias en el manejo de la hacienda pública. Pero el sistema federal no otorga facultades constitucionales, por más acuerdos que se hagan, en virtud de los cuales el gobierno federal se pueda convertir en censor o corregidor del manejo presupuestario de cada provincia.

Además, señor presidente, acá hay un detalle de fondo. Desde 1935, por la ley 12.139, venimos distorsionando el régimen fiscal de la Constitución Nacional, con la famosa ley de coparticipación. La Constitución ha sido sabia. Por un lado, ha conferido a las provincias la total responsabilidad para manejar sus rentas genuinas y todos los impuestos que les corresponden. Por el otro, ha dado facultades al Congreso de la Nación para que a través de subsidios, préstamos de ayuda o empréstitos socorra a las provincias

que con sus rentas ordinarias no puedan garantizar los gastos que implican el cumplimiento del artículo 5º de la Constitución en lo que hace a la enseñanza primaria, a la cual tenemos que agregar ahora todo el cúmulo que significa la enseñanza secundaria — por la transferencia de los establecimientos educacionales —, la administración de justicia y el sistema municipal.

Por eso, cuando algún día dejemos a un costado, luego de un proceso de transición, la ley de coparticipación, vamos a saber quién es quién en el país y haremos el acuerdo federal para ayudarnos mutuamente entre las provincias.

Esto constituye, reitero, una intromisión en el manejo de la hacienda pública de las provincias. Además, no se tiene presente qué pasaría si una provincia no ratificara este acuerdo. Digo esto porque hay algo que subsiste, hay algo que van a recibir las nuevas legislaturas y los nuevos gobiernos provinciales, ya que ese 15 por ciento de quita a la coparticipación se mantendrá hasta que se sancione la nueva ley, y no hasta que venza el plazo que se da a este acuerdo.

Entonces, quiero preguntar qué va a suceder si por ejemplo la provincia de Entre Ríos, Santa Fe o cualquiera de los estados federales, con el cambio de autoridades —no importa de qué partido sean, pueden ser del mismo partido de las que actualmente gobiernan esa provincia— deciden no ratificar y denunciar que ese 15 por ciento les corresponde, y qué va a ocurrir si esos vericuetos legales, que son problemas litigiosos, en el futuro no encuentran solución.

Por eso, señor presidente, mi voto es por la negativa.

Con estas palabras dejo fundada mi posición e indicadas las críticas pretendiendo inclusive haber detallado los montos y cantidades de dinero que por distintos conceptos se manejan en el articulado del presente proyecto de ley.

**Sr. Presidente (Britos).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: confieso que llego a este debate con un ánimo muy especial porque se mezclan dos asuntos —quizá tres— de suma importancia. Uno es el tema dominante que ha atraído la atención de la Cámara ayer y hoy, y la volverá a atraer seguramente en el futuro; me refiero al drama de los jubilados, un asunto del que ninguno de nosotros ha podido sustraerse ni respecto del cual puede ser insensible.

Pero debo decir también que no puedo menos que sentir en mi ánimo y en la decisión que guiará mi voto el efecto de otra circunstancia

muy particular, que es aquella que azota a mi provincia y que ha producido en este asunto, sin duda alguna, una situación de verdadero desme-recimiento y de olvido de sus derechos esenciales.

Este acuerdo que venimos examinando ha sido presentado ante la opinión pública y, desde luego, ante los propios mandatarios provinciales, como una suerte de panacea como otros acuerdos de los cuales solamente queda el recuerdo y no, por cierto, el cumplimiento por parte de la Nación. Una serie de bellos enunciados podemos encontrar en este documento que tengo a la vista y que, con permiso de la Cámara, habré de leer no íntegramente sino destacando alguno de los objetivos que serán motivo de la acción concurrente entre la Nación y las provincias.

Se habla de asistir a las necesidades sociales básicas, especialmente aquellas vinculadas al sector pasivo, afianzar el federalismo, garantizar la estabilidad económica y consolidar las bases para el crecimiento económico; profundizar la reforma del sector público; facilitar el acceso a la vivienda; profundizar el proceso de descentralización como modelo para la prestación de las funciones básicas del Estado. Pero realmente, señor presidente, todo esto no es más que el escenario porque, en realidad, el tema que inicialmente motiva este proceso que desemboca en el proyecto que hoy consideramos es el de los jubilados. ¿Quién va a negar su importancia? ¿Quién la pudo negar en la Cámara de Diputados? ¿Quién la puede negar hoy, aquí, entre nosotros?

Pero a medida que uno observa la discusión que se ha suscitado en la Cámara de Diputados y la que se produce hoy aquí, puede llegar a decir, sin forzar la situación, que no es sólo uno el tema dominante sino que son dos las cuestiones que están directamente enlazadas entre sí: la situación previsional y los recursos que se buscan para solucionarla, tema que está íntimamente ligado a la relación entre la Nación y las provincias con respecto a los recursos que esta vez, como en tantas otras ocasiones, se sustraen de las arcas provinciales para atender obligaciones que tiene el Estado nacional.

Hoy, pues, vemos que no existe aparentemente la solución que se prometió en esa panacea y sí, en cambio, se complica la situación frente a la detracción de los recursos provinciales como consecuencia de la imposición del poder central en desmedro de las autonomías de las provincias.

Hoy ya se puede decir que los jubilados están asistiendo a una nueva frustración no obstante los recursos que antes se les fueran allegando por la aplicación de distintas leyes sancionadas por este Congreso, como en el caso del producido de las privatizaciones y otros arbitrios utilizados. Lo que sí queda como saldo es que las provincias ven reducidos sus ingresos y sus fondos.

La señora senadora por Catamarca, oradora preopinante, se refirió al espíritu con que algunos gobernadores concurren a la reunión que desembocó finalmente en la firma de este acuerdo: un espíritu de rebeldía. Creo que lo que observamos a nivel provincial es un sentimiento de resignación.

Aquí se da lo que los abogados solemos llamar "contratos de adhesión". En Derecho se conoce como "contrato de adhesión" a aquel por el cual una de las partes —la más fuerte— impone sus condiciones a la otra —que teóricamente está en igualdad para discutir y en definitiva firmar o no—, por lo que se ve obligada a aceptar no obstante el hecho de que le desagraden algunas cláusulas. Este es el caso típico de las antiguas cartas de porte de los ferrocarriles o de los contratos de seguro, donde en letra pequeña, en el anverso, se establecen una serie de condiciones que los contratantes no tienen más remedio que aceptar consciente o inconscientemente. Como dije anteriormente, esto ha originado una situación que fue erosionando progresivamente la relación entre la Nación y las provincias en lo que hace a la distribución de fondos.

Señor presidente: tengo aquí, sobre mi banca, un cuadro comparativo que no voy a leer detalladamente pero que considero sumamente ilustrativo. Este cuadro fue presentado por el presidente de la Comisión Federal de Impuestos a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. En forma muy precisa nos ilustra acerca del impacto de las medidas del gobierno nacional sobre la distribución primaria de la ley 23.548.

Así, vemos cómo las provincias que tenían asignado un 56,66 por ciento teórico en la distribución de los recursos, como consecuencia de distintas medidas adoptadas por el gobierno nacional, hoy llegan apenas a contar con un 30,32 por ciento. Esto cuando la Nación, que conforme a dicha ley 23.548 figuraba con un 42,34 por ciento como consecuencia de las referidas medidas, leyes y decretos hoy alcanza al 66,31 por ciento. Evidentemente, ésta es una circunstancia que muestra la progresiva degradación en

la disposición de sus recursos por parte de las provincias, situación que —incluso— se agrava con la transferencia.

Se podrá decir —y ahora mismo se dice— que ello es así como consecuencia de que hay un aumento en la recaudación impositiva. Y yo me pregunto, señor presidente: ¿ese aumento no corresponde acaso a las provincias? ¿No se trata de un aumento que proviene de aquello que constitucionalmente son recursos propios de las provincias y cuya distribución ellas pactan con la Nación, o deben pactar con la Nación, en un acuerdo voluntario? ¿No corresponde a las provincias disponer de ello para atender a esas necesidades irrenunciables de que hablaba recién el señor senador Brasesco, para atender al desarrollo o al nivel económico de sus poblaciones? Es decir, estamos yendo hacia un proceso que, evidentemente, no es beneficioso ni laudable.

Incluso yo, señor presidente, no incurro en ninguna previsión apocalíptica cuando digo que ese 82 por ciento de que se hablaba inicialmente para adoptar medidas de este tipo es, sin duda alguna, un índice ilusorio porque ya la Nación adopta el índice al 31 de marzo de 1991, totalmente diferente de un índice actualizado como el que se suponía.

Ya la justicia ha pronunciado fallos: el propio secretario de Seguridad Social, Schultess, ha reconocido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que lo que se pagará será muy diferente a ese 82 por ciento anunciado.

Y no quiero extender mi exposición, aunque tengo a la vista artículos muy fundados de especialistas en la materia, que muestran la enorme diferencia entre ese 82 por ciento que sirvió como señuelo inicial y la cruda realidad a la que se verán expuestos, sin duda alguna, los clientes del sistema previsional nacional.

Sin embargo, quiero decir que el Congreso de la Nación no ha sido insensible frente a esta situación. Una y otra vez hemos votado aquí distintas leyes sobre el tema —como creo que se recordó hace un momento—, tales como las de pulsos telefónicos y de combustibles, la llamada ley Matzkin, que grava los bienes que no están en el proceso productivo, la correspondiente a los distintos fondos provenientes de las privatizaciones, la de consolidación de pasivos, que hizo la distinción entre acreedores sociales y comerciales. Es decir, el Congreso no ha sido insensible; y yo volvería a votar una y otra vez las leyes necesarias para atender a este problema

que llama a nuestra sensibilidad y responsabilidad.

Pero hay ciertos aspectos del proyecto que estamos considerando que en modo alguno puedo silenciar, a la vez que debo dejar constancia de mi disidencia absoluta.

En la primera cláusula del proyecto de ley, como bien se ha dicho, se hace una distinción, y figura un 15 por ciento que se retrae de la coparticipación para destinarlo al pago de las obligaciones previsionales nacionales.

Participo de las críticas y reservas que se han hecho hace momentos, como también se hicieron en la Cámara de Diputados, respecto de esa ambigua frase que permite al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación la sustracción dentro de este 15 por ciento con destino al pago de las obligaciones previsionales de una suma para los llamados "otros gastos operativos que resulten necesarios", frase ambigua, elástica y engañosa, que no hace sino reeditar algunos de aquellos decretos que fueron justamente impugnados en su oportunidad y que ahora el Poder Ejecutivo habrá de derogar, dejando constancia de que las sumas percibidas por la Dirección General Impositiva seguirán firmes, lo que muestra lógicamente la justicia de los reclamos que entonces se hicieron.

Hay algo más importante en todo esto y es lo que, precisamente, motiva el sentido de mi voto. Me refiero a lo que surge del inciso b) de la cláusula primera, en cuya virtud se establece la suma de 43.800.000 pesos para ser distribuida entre los estados provinciales suscriptores del convenio.

Con relación a este tema, tengo a la vista un cuadro numérico que exhibe una dolorosa situación para los correntinos. En ese cuadro se muestra la participación que cabe a cada provincia respecto de esa suma global que acabo de indicar. La de Buenos Aires no recibe participación y eso es perfectamente justo porque ya tuvo su tajada inicial; lo que la convirtió en una de las propiciadoras del acuerdo. La provincia del Chaco tampoco recibe participación; desconozco las razones de esta situación y, por otra parte, no me corresponde entrar en su análisis.

La participación que reciben las provincias de Santa Fe y de Córdoba es menor que la de las demás. La escala va de 1.900.000 pesos a 3.000.000 de pesos mensuales, según los casos. ¿Cuánto es lo que se le adjudica a la provincia de Corrientes? Lamentablemente, cero; así como se oye.

Esto justifica que esté impedido de votar el asunto que llama a la responsabilidad de quienes representamos y queremos representar con honor a nuestra provincia.

Debo hacer aquí una acerba crítica a la actuación de la intervención federal en Corrientes, que está destinada a regir los destinos de la provincia y que debería tener como principal objetivo —además de llamar a elecciones— el de cuidar los intereses de nuestro Estado.

No parece que la intervención se haya preocupado por requerir la opinión de sus senadores. La senadora por Catamarca, y algún otro señor senador también lo ha hecho, efectuó este mismo tipo de reclamo. En nuestro caso, no hemos sido consultados. Si se nos hubiese requerido opinión, jamás habríamos podido aconsejar o convalidar este desconocimiento de los intereses de Corrientes.

Sin embargo, parece que este pacto ha sido firmado por la interventora en Corrientes sin que hubiese habido discusión o consulta previa. Evidentemente, esa firma debe responder a las instrucciones que puede haberle impartido el Ministerio del Interior. La interventora aceptó tales instrucciones en desmedro de los intereses que está obligada a custodiar.

Resulta claro que estamos en condiciones singulares respecto del resto de las provincias; además, hay algo que es peor: se sienta un precedente funesto porque está claro que aquí se está elucubrando o se están dando los pasos iniciales de una nueva ley de coparticipación de fondos entre la Nación y las provincias.

Me pregunto qué va a suceder el día de mañana, ya sea con la intervención, si se extiende demasiado tiempo, o con el gobernador elegido legítimamente por el pueblo de la provincia, teniendo en cuenta esta situación, por la que Corrientes está ausente y ha renunciado voluntariamente por vía de su representante actual a aquello que legítimamente le corresponde. Esto motiva nuestra justificada crítica al procedimiento por el cual al ampliarse la intervención federal al Poder Judicial lo que se ha hecho y buscado es, lisa y llanamente, tener un pretexto, un motivo, para prolongar el plazo para el llamado a elecciones y evitar que el pueblo de Corrientes reasuma su soberanía por la vía legítima que le corresponde.

Esto, sin duda alguna, muestra que tienen razón las citas doctrinarias que podríamos hacer en este momento si se produjera el debate que nosotros estamos esperando y reclamando. Podríamos citar a todos los autores más conocidos y

prestigiosos que tenemos a mano. Lo mismo podemos hacer con la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales. Incluso podemos mencionar algo más importante para los señores senadores que aquí están sentados, el proyecto sobre intervención federal que votamos en mayo de este año de manera unánime, por el que se dispone que la intervención a las provincias tiene que hacerse necesariamente por ley cuando el Congreso está en funcionamiento.

Todo eso se ha desconocido y ahora tenemos una clara violación de nuestra Constitución, según lo acaban de afirmar ayer en un fallo integrantes de la justicia nacional.

Esto es lamentable, señor presidente. Y mucho más lo son las expresiones que hemos leído en los diarios de hoy, que habrían pronunciado la interventora en Corrientes o el ministro del Interior, por las que dicen, lisa y llanamente, que van a desconocer cualquier pronunciamiento judicial.

Es decir que aquí no hay solamente un agravio a la potestad del Congreso al intervenir por decreto, sino también existe un agravio al Poder Judicial al desconocer sus funciones y ponerse en abierta rebeldía frente a sus dictados.

Por estas razones, como representante por Corrientes, yo no puedo convalidar este despojo hecho ilegítimamente por motivos que desconozco. No sé si será por negligencia o complicidad pero, de cualquier forma, se trata de incumplimiento de aquellos deberes que son elementales y necesarios para quien tiene el honor de estar colocado en la cúspide de su Poder Ejecutivo.

Por todo ello, señor presidente, expreso mi voto negativo juntamente con mi indignación por esta actitud realmente incalificable.

**Sr. Presidente** (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Cendoya.** — Señor presidente: breves reflexiones impone la importancia del tema que estamos tratando, para no continuar agobiando a los señores senadores con un debate que ya se prolongó en el tiempo por encima de las prescripciones reglamentarias que sancionáramos días pasados.

Pienso que para este cuerpo tiene una importancia especial el tratamiento de este tema ya que, si bien integramos el Poder Legislativo nacional, el equilibrio se verifica en este cuerpo en tanto somos también representantes de las provincias. Incluso, en el moderno derecho público provincial, algunas Constituciones locales —como las de La Rioja y Córdoba— han defi-

nido la función de los señores senadores nacionales en tanto pueden ser sometidos a instrucciones por parte de las legislaturas locales cuando se trata de la defensa del federalismo en cada situación en que se ve comprometido.

Estamos tratando un tema que toca al federalismo en su raíz. Como dice el doctor Pedro J. Frías, el federalismo es un mandato histórico vigente y grávido de futuro. El proceso de desfederalización —señala este autor— ha concluido en el país en sus mejores y más representativas tendencias doctrinarias y en lo que hace a la defensa del interés nacional.

Señor presidente: las provincias podrán no ser anteriores a la Nación, pero sí es evidente que son anteriores al Estado nacional y constituyen, dentro de la competencia que asigna la Constitución Nacional, esferas o reservas de poder en las que no caben intromisiones ni supremacías de ninguna naturaleza. Incluso, como señala la Constitución Nacional, las provincias se dan sus propias instituciones y se gobiernan por ellas.

Este acuerdo que estamos considerando y que viene a este cuerpo con la sanción dada por la Cámara de Diputados de la Nación, incursiona directamente en áreas de reserva de los poderes autónomos de las provincias.

Creemos que con esto no se complica solamente la pureza dogmática del Derecho Constitucional Argentino sino que se afectan soluciones que los tiempos reclaman como necesarias.

La teoría y la práctica de gobiernos centralistas han demostrado en los últimos tiempos su absoluta ineficacia no solamente en nuestro país sino en todo el derecho comparado. Sin embargo el autor que he citado, refiriéndose a Jacques Delors ha señalado: "Sólo una sociedad descentralizada puede encontrar los mecanismos de ajustes a sus tensiones en los niveles adecuados y evitar que el más pequeño conflicto se vuelva drama nacional"<sup>1</sup>. También señala Frías: "El gobierno federal es supremo en lo suyo pero subsidiario en relación a esa esfera de reserva de las provincias. Sin embargo, veinte o más índices de dependencia interna de las provincias contrarían esta condición de subsidiariedad". "¿Esa dependencia interna (se pregunta Frías) no da la razón a quienes, como Rodolfo Rivarola, entendían que ya era superfluo el federalismo argentino? Toda dependencia —concluye— es un producto

<sup>1</sup> Pedro J. Frías: *El proceso federal argentino (De la decadencia a la recuperación)*, Córdoba, 1988, páginas 23-24.

completo de responsabilidades compartidas. Lo único averiguado es que no es definitiva". "La minoridad está llamada a ser adulta y toda dependencia es rescatable. Pero si la dependencia llegare a formar parte de nuestras resignaciones históricas, quedaría por probar que las provincias pueden vivir sin sus gobiernos locales. ¿Y las estadísticas de las intervenciones federales no lo prueban? Creemos que prueban lo contrario. Aun así no es comparable una larga intervención a la privación definitiva del gobierno propio".

Señor presidente: este proyecto de acuerdo nos agravia sustancialmente, más allá de las conveniencias financieras que pueda tener en el reparto de la porción de los impuestos disponibles, por la invasión de facultades propias de las provincias que son sometidas a una dependencia inconstitucional del gobierno central y vejadas a través de una tutela sobre sus disponibilidades y sus capacidades de gobiernos autónomos.

Este tema del pacto se presenta sorpresivamente. *in crescendo* de opiniones, que hemos observado en los últimos tiempos a través de dos factores concurrentes. En primer lugar, un aumento plausible de los impuestos derivados de la coparticipación federal, lo que ha hecho pensar a algunos funcionarios del gobierno nacional que son recursos propios de la Nación, cuando simplemente la coparticipación resuelve un problema de impuestos que pertenecen a la Nación y a las provincias y que, concertada y civilizadamente, han resuelto compartirlos a través de la ley de coparticipación federal.

Este problema se agrava a partir de que con ese notable incremento de los recursos se piensa peyorativamente que las provincias no son capaces de administrarlos y deben ser sometidas a directivas del gobierno central.

Pero también adquiere dramatismo el actual momento cuando se contempla la situación de la enorme deuda social que el país tiene con el sector más postergado, que es el de los jubilados, y se convoca a las provincias a un esfuerzo solidario del que no podrían sustraerse so pena de permanecer alejadas de este problema que nos preocupa a todos por igual.

La competencia impositiva está delimitada en los artículos 4º y 67, inciso 2), de la Constitución Nacional. Si bien por su antigüedad histórica estas disposiciones pueden no resultar aptas para solucionar los problemas actuales —como por ejemplo la situación de la previsión social, en lo que todos los países del mundo recurren no solamente a los aportes de los afiliados o contribuyentes al sistema sino que también toman im-

puestos de las rentas generales, cosa que no podía estar prevista en nuestra Carta Magna—, para la distribución de los impuestos participados nosotros contamos con la ley-convenio que tiene el equivalente, en el sistema federal de gobierno, de un tratado que no puede ser modificado sin la voluntad de las legislaturas provinciales ni del Congreso Nacional, factor indispensable en el tratamiento de este tema.

Por eso sorprende que no se haya acompañado el proyecto que acaba de ser sancionado por Diputados de las reservas formuladas por el ex senador y actual vicegobernador de la provincia de Córdoba, que forman parte de ese convenio y que resguardan —adecuadamente a mi criterio— la esfera de competencia de los distintos sectores o instituciones provinciales y nacionales comprometidos.

En el momento de la votación en particular solicitaré que se incluyan las reservas a que hice referencia, porque forman parte del texto general del convenio. Allí se indica que en relación a lo acordado en la cláusula séptima debe interpretarse que la solicitud de tratamiento de los proyectos de ley enumerados es independiente de la posición que al respecto pudieran adoptar los representantes del pueblo de las provincias —y la de Córdoba en particular— en el Congreso de la Nación, salvando así la responsabilidad exclusiva que nos cabe como integrantes del Poder Legislativo nacional y senadores nacionales para decidir con nuestro voto la aprobación de estos proyectos o no.

He señalado que es evidente que nadie puede permanecer ajeno a este drama social de los jubilados. Pero también es bueno puntualizar que la ansiedad privatizadora que caracterizó a algunos funcionarios que actualmente no forman parte del equipo económico se movilizó a través de la desfinanciación del sistema previsional.

Si se recuerda que se derogaron los impuestos a los pulsos telefónicos destinados íntegramente a dirigir recursos al sistema previsional, se advierte la ligereza con la que se procedió en aquel momento y que obliga ahora a recurrir a todo el sistema impositivo nacional, a toda la masa coparticipable de impuestos para reponer fondos que a lo mejor en su momento podrían haber constituido un alivio muy ponderable para el sistema previsional, y muy importante ahora si se tiene en cuenta el extraordinario nivel de facturación que corresponde a las empresas telefónicas.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable senado, senador Eduardo Menem.

**Sr. Cendoya.** — También nos agravia, señor presidente, señores senadores, ese espíritu de paternidad y de superioridad que se advierte en la letra del convenio por parte de la Nación, que se reserva como una especie de patria potestad sobre las provincias, a las cuales considera incapaces de dirigir su propia gestión de gobierno.

Hace pocos días, con arrogante insolencia un funcionario nacional ha dicho que va a controlar el destino que las provincias den a los fondos coparticipables, como si ellos fueran propiedad de la Nación y no les correspondieran a las provincias en la proporción que señala la ley-acuerdo que he señalado.

Nosotros pensamos, señor presidente, que se ha generado en la opinión pública, a través de múltiples comunicadores —sobre todo de la Capital Federal—, una tendencia a considerar a las provincias como ineptas para realizar los ajustes en los tiempos que corren, sin considerar la distinta naturaleza que tienen los servicios a cargo de la Nación y los que están a cargo de los estados locales.

Todo el gasto social, como saben los señores senadores, está a cargo de las provincias: seguridad, salud pública, educación y demás. Es imposible pretender la realización de ajustes sobre sistemas que de suyo son deficitarios. No podemos cerrar comisarias, hospitales ni escuelas. Desde luego, el gasto público podrá ser optimizado en las provincias. Lo anterior no quiere decir que no pueda ser mejorada la eficiencia en la utilización del gasto, pero nunca podrá ser reducido.

Naturalmente, la especial naturaleza de los servicios provinciales determina que para tener sueldos dignos, maestros que reciban retribuciones adecuadas, policías que cobren sueldos acordes con el riesgo personal que asumen, magistrados con retribuciones que estén de acuerdo con la dignidad de la función que ejercen, no sea posible la reducción del gasto. En efecto, esos gastos no van a descender en ningún momento.

Es de confiar que el aumento de la recaudación fiscal nacional más los esfuerzos fiscales que todas las provincias están realizando puedan servir para mejorar la calidad de los servicios prestados por las provincias.

La Nación y las provincias han comprendido que éstas, por su inmediatez, están en mejores condiciones de prestar esos servicios, pero pensar que puedan hacerlo gratuitamente o realizar ajustes sobre una infraestructura de servicios que está ampliamente deteriorada es una

ilusión. Por eso el respeto a la ley de coparticipación es fundamental para preservar las instituciones provinciales.

El Consejo Federal de Ministros de Hacienda ha denunciado en los últimos cuatro años quince violaciones a esta ley-tratado —algunas por leyes correspondientes a gobiernos nacionales de otro signo, otras por decreto y otras por decretos de necesidad y urgencia—. En fin, ha habido una batería de disposiciones que continuaron distorsionando el sistema federal impositivo.

Señor presidente, señores senadores: estas son las observaciones que nos merece el proyecto en consideración, a pesar de las mejoras que se ha acordado con los distintos bloques introducir en el recinto para asegurar o dar transparencia a algunas transferencias de recursos, no se resuelven definitivamente los problemas legales que ha suscitado esta ajuridicidad que caracteriza desde hace varios años al manejo de los recursos coparticipables.

Con estas breves reflexiones y en la confianza de que en este recinto, que es el representativo de los intereses de las autonomías provinciales, una vez superada la coyuntura podamos encontrar un sistema que asegure un federalismo de concertación que distribuya adecuadamente las competencias y de que cada una de las provincias en su jurisdicción asuma la competencia propia con toda la plenitud constitucional, dejo expresada la oposición de este bloque a la aprobación en general del proyecto en consideración.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

**Sra. Malharro de Torres.** — Señor presidente, señores senadores: habría sido más fácil irme en silencio y manifestar mi posición levantando la mano o no en el momento de la votación. Pero el 10 de diciembre me voy de esta Cámara y al día siguiente quiero seguir caminando por las calles de Mendoza y pudiendo continuar enfrentando a mis comprovincianos, a mis pares políticos y a los pares de la oposición.

Quiero decir por qué voto en contra este proyecto. Lo votaré así porque se sigue consolidando un proyecto político hegemónico que sigue avasallando las autonomías provinciales y que sigue lesionando la división de los tres poderes.

Recordaba que hace más o menos un mes los dos senadores por Mendoza pedimos al gobernador de Mendoza una entrevista. Y no puedo olvidarme —y no estoy cometiendo una infidencia— de cuando este joven gobernador, a

quien respeto, no hablaba preocupado acerca de qué iba a pasar —se refería a un pacto de esta naturaleza— con los derechos de coparticipación de Mendoza. Y nos decía que iba a defender la posición de Mendoza para que no se convirtiera en una repartición administrativa más.

Entonces, su imagen no se me ha apartado en toda esta tarde. Y comprendo a este gobernador —como a los otros— trajinado y forzado.

Toda la tarde he oído hablar de necesidades básicas de los jubilados, pero no he oído decir —salvo en el caso de algunos legisladores con los que coincido, fundamentalmente el señor senador Cendoya— que tendríamos que ponernos a llorar, señores senadores. Y ello es así porque lo que les queda como reaseguro a los señores gobernadores, que no han podido hacer otra cosa que firmar este convenio en defensa de las necesidades tremendas que tienen nuestras provincias, somos nosotros, los senadores de la Nación, para oponernos a este avasallamiento a la división de poderes, a este avasallamiento a la República, que se va consolidando cada día más.

El día de hoy es triste, está nublado y lluvioso. Para terminar, coincidiendo con todos los argumentos que han expresado quienes votarán por la negativa, digo que me voy a ir muy triste de este Senado porque alguna vez, cuando fui estudiante secundaria —y estaba en esa galería—, nos trajeron para aprender cómo se defendía aquí la autonomía de las provincias y la jerarquía de la República. Tengo que decir con dolor, pero con profundo respeto por cada una de las posiciones que se puedan adoptar, que es muy triste lo que está pasando: la República está perdiendo a sus defensores, que somos nosotros, los senadores sentados en estas bancas.

**Sr. Storani.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — En primer término, tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Señor presidente: casi en las postrimerías del debate tengo la obligación de introducirme en él por una razón fundamental. Esta noche se han dicho muchas cosas cuando tratamos un tema tan importante como este. Se han dado números, cifras, pero no se habló de las condiciones en que dejaron a 3.200.000 jubilados en 1989. Nadie se animó a hablar. Aquí, incluso, hubo un representante provincial que se avergonzaba de que un gobierno nacional tomara una medida como esta sobre la coparticipación. Y esos representantes en algún momento no se avergonzaron cuando el gobierno militar

dejó sin efecto el 15 por ciento que aportaba cada empresario por cada trabajador, lo que determinó que las cajas no percibieran 10 mil millones de dólares.

En aquel momento el ex ministro de Economía, doctor Martínez de Hoz, estableció que mediante el IVA se iba a solucionar el problema de los jubilados, y no se lo hizo. Esto se lo trasladó al gobierno constitucional que recibió el doctor Alfonsín en 1983.

El gobierno constitucional tampoco lo pudo solucionar pero sí dejó aquel decreto 648 para que lo pagara el que viniera, porque tampoco lo pagó el gobierno radical.

Ya sé que todos tenemos sensibilidad, que nos duele esta situación. Sé que esta no es la mejor propuesta. Es cierto, como decía el señor senador por Entre Ríos, que con 235 millones de pesos no alcanzamos a pagar el 82 por ciento. Pero también sé que hemos buscado fondos a través de la venta de YPF que se hará más adelante pues, en este caso, del 20 por ciento de las acciones con que se va a quedar el Estado, un 51 por ciento será volcado a los fondos para el sistema de previsión social.

Estamos intentando solucionar el problema. Hay cosas sobre las que no estoy de acuerdo pero en este intento necesitamos la colaboración de todos. Yo no me siento mal por esta actitud, como decía la señora senadora preopinante. No estoy despojando de nada a estas provincias porque en 1989 no percibían casi nada de la coparticipación. Sólo recibían papeles porque la evasión fiscal era tal que hasta se puede hacer una lista de los bancos que estaban fundidos en el interior.

¿Cuál era la coparticipación? Sólo tenemos los números; nada más. Pregunten a los señores senadores gobernadores de cualquier extracción política que sea, no únicamente a los justicialistas, qué percibían en junio de 1989 y qué es lo que perciben ahora. Eso es lo que no se quiere preguntar y se hace aparecer al bloque oficialista como si a través de esta actitud hubiéramos terminado con las autonomías de todas las provincias. No pretendemos esto. Necesitamos la colaboración de los otros bloques para sancionar este proyecto de ley. No somos los mejores. También tuvimos algunas en contra, en algún momento, con respecto a nuestros compañeros de la clase pasiva. Sin embargo, no podemos soportar más que todos los miércoles estos ancianos, con legítima razón, rodeen este Congreso y nos echen una puteada; porque yo me siento mal. Las vallas no pueden detener el reclamo popular. Y me

siento mal como legislador, como seguramente también deben sentirse mis colegas, mis compañeros.

¿Cuál es la forma, cuál es el invento que necesitamos para recaudar? Se han creado muchos mecanismos pero la solución nunca fue dada: ni en el gobierno militar ni en el gobierno radical. Y nosotros tampoco hemos podido con casi tres años de gobierno, solucionar el problema de los jubilados hasta ahora.

Por eso creo que ha terminado la hora de los buenos discursos. No podemos decir que no estamos de acuerdo con esta forma porque proponemos otra mejor. No existe una forma mejor. Esta noche he escuchado a todos y ninguno ha hecho una propuesta seria. ¿Cómo vamos a pagar esta enorme deuda que tenemos con los ancianos cuya expectativa de vida ya no da para más?

Y me siento mal como senador de la Nación porque tengo vergüenza de ver esos rostros que nos imputan una desgraciada intervención como funcionarios públicos. Tengo vergüenza porque cada vez que salimos son ellos los que nos están diciendo: "Arréglenos el problema; no podemos continuar más con este sueldo miserable. Somos los que trabajamos para esta Nación."

Aquí se han expresado muchas cosas. Yo podría decirles qué pasó en la Caja de Autónomos y cuándo sucedió. Hubo un gobierno que otorgó un montón de jubilaciones. Tenemos casi ochocientos mil jubilados "truchos", como dicen los chicos ahora. Y vayan a ver quién las dio en una época muy fácil porque las cajas tenían plata. Hay algunos que pretendían ganar elecciones de este modo. Y ahora las consecuencias son las que tenemos a la vista; ahora es el momento de arreglar la cosas. ¿Qué tenemos para distribuir?

Recién hemos logrado contener un poco la evasión fiscal. Y más o menos tenemos...

**Sr. Brasesco.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador, con la venia de la Presidencia?

**Sr. Britos.** — Sí, señor senador.

**Sr. Presidente (Menem).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Brasesco.** — Señor presidente: comprendo lo que dice el senador Britos. También me duele el problema de los jubilados; me duele mucho.

En mi exposición me referí al mensaje remitido oportunamente sobre el 82 por ciento, no al mensaje por el cual tendríamos que haber dicho que comenzábamos a buscar alguna forma de solución.

En nuestro gobierno hubo intención de arreglar este problema y se fracasó en muchos aspectos. Podríamos hablar largo y tendido de los motivos de ese fracaso. También podríamos hablar largo y tendido, remontándonos en el tiempo, de quienes fueron los colaboradores del señor Martínez de Hoz tanto en el Banco Central como en la Secretaría de Seguridad Social: Domingo Cavallo en un lugar y en el otro el señor Estrada, que fuera el primer secretario de Seguridad Social del gobierno del doctor Menem. Sabemos que han ocurrido todas esas cosas; pero no es lo que más duele de esta situación.

En mi provincia, por ejemplo, durante todos los gobiernos —a Dios gracias— se han pagado en tiempo y forma tanto las jubilaciones como las remuneraciones. Pero hoy, un gobernador que me merece el más alto de los respetos, un hombre de signo político distinto con quien, sin embargo, me enorgullece compartir una amistad personal desde hace tiempo, se vio en la obligación de anunciar que debe pagar el monto de las jubilaciones provinciales recién el 14 de cada mes. Además, deberá pagar las remuneraciones —cosa que no ocurrió hasta el mes pasado— recién el 5, 6 o 7.

Entonces le digo a mi amigo Britos que cuando nosotros, hablamos de la problemática referida a la coparticipación —que por otra parte en 1989 era menor que la de hoy— decimos que sí, que es cierto, que era automática. Pero era automática porque así lo consagramos en este mismo Senado. De esa manera, los fondos se giraban diariamente gracias a la automaticidad de los depósitos.

El detalle fundamental es que las cajas de jubilaciones vienen deteriorándose por muchos aspectos desde la década del '40. Por otro lado, en la historia del sistema previsional argentino hay jubilaciones de favor "a troche". Pero debo puntualizar que la coparticipación se planteó para pagar el 82 por ciento; y no alcanza.

Sabemos que hay que hacer un gran sacrificio; que tenemos que resolver el problema de alguna forma. También sabemos que estamos trabajando juntos en todas las cosas. Digo esto porque nuestra bancada ha realizado colaboraciones excepcionales en este proceso en el que nosotros también queremos ayudar para resolver los problemas.

Si bien hemos defendido los procesos de estabilidad también expresamos nuestras críticas al sistema de jubilación vigente. Hemos criticado —y lo seguiremos haciendo— la insensibilidad del equipo de Economía. Es insensible no sólo a

las cuestiones sociales sino también a una discusión seria y racional porque confiesa sus errores después de haberlos cometido y, a pesar de ello, no acepta las correcciones razonables que se le hicieron en el momento oportuno.

Por eso le digo al señor senador por San Luis, mi estimado amigo, que nosotros compartimos el dolor; que ponemos el hombro para buscar soluciones. Pero también debo decirle que en esta cadena de pecados, de falencias y de errores nadie está exento; ni los que estamos aquí sentados ni los ausentes. Pero no hemos cometido el famoso pecado que se cometió en la época del proceso, cuando hubo un secretario de Seguridad Social que también fue embajador en nuestra época ante el Vaticano, y un presidente del Banco Central, el actual ministro de Economía, quien en ese momento trabajó y colaboró en el proyecto económico que desencadenó una tragedia en la República Argentina.

**Sr. Presidente (Menem).** — Me permito advertir a los oradores que con la interrupción que concedan correrá el tiempo reglamentario.

**Sr. Britos.** — Señor presidente: ya para cerrar, quiero decir que no conocí en mi vida política ministro de Economía con mucha sensibilidad en este aspecto; ha sido muy difícil. Generalmente, los ministros de Economía han pretendido que cerraran las cuentas, han buscado la recaudación. En julio de 1989, por falta de recaudación, los jubilados cobraban 17 dólares por mes. Eso cobraban los jubilados. Eso cobraba mi padre.

Entonces, uno no se puede engañar. Por más que el ministro quería arreglar, no tenía dinero. Eso cobraban los jubilados.

Tenemos 3 millones 200 mil jubilados; para darles cien pesitos a nuestros viejos, necesitamos 320 millones más de recaudación. Nuestro gobierno está haciendo una propuesta que es muy discutida, muy debatida; pero una propuesta al fin. Y reitero que esta noche no escuché ninguna otra. Todos han dicho que esto está mal, pero nadie dice qué es lo mejor ni hace una propuesta seria.

Es cierto que hemos tomado a las provincias tal vez una parte muy importante de su recaudación; pero también es verdad que las provincias antes no la recibían, y eso es lo que tampoco nadie ha dicho. Antes se tenían que arreglar con mucho menos. Entonces, señor presidente, señores senadores, creo que más allá de nuestro pronunciamiento personal, el de cada uno de los senadores, no tenemos que irnos amargados. Es lo que hemos conseguido, es lo máximo.

Nosotros hubiéramos deseado una operación mejor para las provincias, no tan dolorosa. Pero no tenemos esa posibilidad. Puedo contarles a los jubilados que me hubiera agradado dar 200 pesos a cada uno, pero no los tengo. No sé cuál es el otro impuesto que podemos crear, ya que cada impuesto que creamos recae sobre el ciudadano porque, de alguna manera, debe pagarlo, y nosotros no queremos pasar más por esto.

Creo que éste es un intento. Tal vez más adelante, cuando tratemos la posición de nuestro gobierno respecto del sistema previsión social ya estemos más preparados y no sé de cuál bancada surja algo mejor. Pero nos vamos a incorporar todos y, naturalmente, vamos a apoyar esa nueva idea.

Nosotros decíamos hace meses que algunos empresarios habían sido insensibles al reclamo popular, que no habían entendido el mensaje del señor presidente cuando al inicio de sus funciones los incorporó, les extendió su mano generosa. Y han pasado algunas buenas épocas, no digo que ha sido lo mejor. Pero este empresario argentino, que busca enriquecerse rápidamente, no ha sabido distribuir equitativamente la riqueza, por más control que haya realizado el Estado.

Por eso, en esta noche voy a levantar la mano, y lo voy a hacer con alegría, porque tal vez esa alegría nos indique que iniciamos una etapa para poder devolver a nuestros viejos, a nuestros ancianos, lo que legítimamente se ganaron: un salario digno. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Sánchez.** — Honorable Cámara: seguimos en esta suerte de tornado cuya veritginosidad sin lugar a dudas se está atenuando.

Aquí se habla muy alegremente de los problemas que tenemos que resolver en este momento; todos hablamos de la crisis y del esfuerzo que debemos realizar para superarla. Sin embargo, en la práctica, desgraciadamente, no se nota la intensidad de nuestro esfuerzo.

Forzosamente, en cada una de las oportunidades que se presentan, mientras se continúe utilizando un vocabulario duro e intransigente, habremos de responder lo que se diga saliendo a la arena política. Ya dijimos que cargamos con nuestras culpas. Estamos cometiendo errores y sabemos que hay funcionarios que no están a la altura de la circunstancia.

Todo eso es parte de la crisis por la que venimos atravesando. Su punto culminante se produjo en julio de 1989, cuando estábamos al

borde de una situación que podía escaparse de las manos y llegar a un cruel enfrentamiento entre los argentinos. No es una acusación; simplemente, es un análisis. Debemos rescatar de esa situación la actitud que asumió el entonces presidente de la República, doctor Alfonsín, cuando al no poder controlar el país, renunció antes de finalizar su mandato.

Eso es lo que este gobierno, que tiene su signo político distinto, ha recibido. Le dieron el explosivo con la mecha encendida. La inflación era monstruosa. En el mes que asumió la presidencia de la Nación el compañero Carlos Menem llegó al 202 por ciento.

Esa situación requería una sola medicación: medidas drásticas, a veces dolorosas, como cuando hay que cortar por lo sano porque la medicación tradicional ya no es suficiente.

A través de la historia tenemos varios ejemplos de este tipo de actitudes. En el imperio romano, cuando los hechos se ponían tremendamente difíciles, se elegía a un dictador para superar la situación, aunque con el tiempo se haya desvirtuado esa figura extrema, sólo para casos extremos.

El señor senador por San Luis, el compañero Britos, acaba de decir una cosa muy importante: dijo que estamos intentando hacer algo. Intentar significa, nada más ni nada menos, que hacer el esfuerzo para encontrar los correctivos a situaciones difíciles.

No nos vamos a detener solamente en el caso de los jubilados. Sólo una bestia no comprendería el dolor que provoca esa situación. Todos podemos tener algún familiar que esté cobrando una jubilación de doscientos pesos mensuales y sabemos lo que ello significa. No podemos negar que se trata de un problema acuciante, humano, de derechos humanos. Tampoco podemos negar los índices de mortalidad y de morbilidad infantil, que son producto de la misma crisis que venimos padeciendo.

Tampoco podemos negar la deserción escolar ni la miseria generalizada que nos lleva a una situación de país infradesarrollado porque las condiciones potenciales de riqueza que tiene la Argentina realmente no pueden permitir que se padezca tal miseria. Todo esto posibilita que los demagogos de siempre salgan con una bolsa de comestibles a buscar la voluntad ciudadana pervertiendo al ser humano, por el que aspiramos que tenga la total libertad de elección cuando debe elegir.

Aquí no está jugando un partido político contra el otro partido político. Aquí está jugando el país para consolidarse como una república real a fin de que lo podamos proyectar al futuro, que es el afán que se tiene cuando verdaderamente existe vocación de servicio.

Si entramos a analizar los distintos elementos que componen el cuerpo de la Nación, nos encontraremos con que todos o casi todos los órganos están infectados y, lo que es peor, infectados por la inmortalidad que no sólo se observa en los funcionarios que se venden por un peso, sino que es compartida por aquellos que compran a esos funcionarios para hacer su agosto. Se trata de esos empresarios a quienes el compañero Britos se ha referido, que nunca tuvieron crisis porque siempre estuvieron haciendo su negocio y todo peso que ganaron se lo llevaron afuera y nunca sirvió para la riqueza nacional. La prueba evidente está en que existe fuera de la Argentina una cantidad de dinero igual a nuestra deuda externa.

Y si juntamos todas esas cosas, armándolas como un rompecabezas, tenemos que aceptar de una buena vez que el andamiaje de la República, su estructura, ha hecho "crack". Se está derrumbando. Eso significa nada más y nada menos que es necesario apuntalar, reparar o cambiar los elementos que para estos tiempos no funcionan.

Se está hablando de una reforma constitucional. Algunos se espantan cuando hablamos de eso porque, claro, arteramente están sacralizados los distintos dispositivos que tiene nuestra Carta Magna para regir la vida de la sociedad argentina.

Y se hace cuestión porque se quiere permitir la reelección del presidente. ¿Qué problema hay en que se reelija a Menem o no? La vida del país no se va a detener por ello.

Pero existen otros aspectos que se pretenden modificar y que son fundamentales, como aquel que es producto de una época y que determinó que se estableciera que el presidente de la República debía ser católico. Es una acción que coarta la libertad de ser elegido...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Sánchez.** — No puede ser que nosotros sesionemos desde el 1° de Mayo hasta el 30 de septiembre. Para ello había justificativos en aquella época en que no existía el ferrocarril u otros medios de transporte rápidos. Pero no puede ser ahora, cuando la vertiginosidad del mundo nos está obligando a permanecer atentos a los hechos para poder legislar.

No estamos atentando contra la Carta Magna; de ninguna manera. Estamos tratando de reformarla para introducir nuevos elementos que hagan posible el avance ágil del país hacia su destino.

Se achicó el mundo. Las fronteras no son más que líneas demarcatorias en un mapa. Ello nos obliga a una relación constante con los vecinos y las demás naciones de cualquier lugar del mundo.

Todas esas cosas tienen que estar contempladas en los dispositivos que incorporemos. Pero no nos vengán a hacer cargar con algún sambenito. Nosotros no eludimos las responsabilidades. Jamás eludimos los errores que pudimos haber cometido.

Tampoco nos vengán a decir que esto avasalla a las provincias. Porque si algo se puede decir en ese sentido es por las circunstancias que se presentan. Y el día que se ponga en marcha el aparato productivo real del país, seguramente cada zona, cada provincia y cada región, podrán tener la retribución que el esfuerzo que realizan para movilizar sus recursos les proporciona.

Entonces podremos marchar todos, porque el problema central es este. Nos condujeron a través de una política tenebrosa. Los medios de comunicación nos hicieron creer cosas, nos obligaron mediante esa presión sutil de la propaganda a que pusiésemos en los bancos el dinero para especular y nos olvidáramos de trabajar. Acá están los índices de 1984, señor presidente, el pico más alto de la producción del país en materia agraria. ¿Cuánto hemos caído? ¿A cuánto estamos ahora? ¿Qué significa esto? Hemos perdido la vocación de trabajo, que hay que recuperar.

Yo digo, como lo hacía mi general Perón, que por lo menos cada argentino debe producir lo que come todos los días.

Esta es la realidad descarnada, dicha un poco incoherentemente, pero es lo que le está pasando al país.

Ha concluido un proyecto de país, señor presidente, que cada uno podrá juzgar como quiera: malo, bueno o regular. Pero, reitero, ha concluido un proyecto de país y los tiempos nos exigen diagramar urgentemente otro y ponerlo en marcha con proyección en el mundo de modo que nos permita desarrollar nuestras aptitudes en beneficio de los argentinos y también de todos los desvalidos del mundo porque nunca más podremos aceptar que se sigan dando los despiadados porcentuales de miseria en cualquier lugar del globo.

Tampoco podemos aceptar que se fabriquen guerras alimentando viejos rencores étnicos o religiosos para vender armas que sólo sirven para matar al ser humano, para aniquilarlo y no para darle la trascendencia que realmente tiene como tal.

Este es realmente el problema de fondo, la crisis que afecta al país. Y dentro de ella están los viejos por quienes pelearemos hasta poder hallar una solución, aunque más no sea para encontrar un paliativo transitorio.

Tenemos que pelear por los niños abandonados. Y estas no son sensiblerías. Me refiero a los niños abandonados que tienen la escuela de la calle, que es la escuela de la delincuencia, y que luego no podremos recuperar.

Tenemos que pelear contra las fantochadas de una clase que se solaza dilapidando dinero y mostrando su miseria moral que, desgraciadamente, sirve como un ejemplo que muchos quieren imitar.

Pero no nos ocupamos todavía, ni lo decimos, de esa franja pequeña de jóvenes que trabajan todo el día para poder estudiar.

Señor presidente: este es otro problema que tenemos en materia educativa. Estamos intentando dar una serie de normas a través de una ley para tratar de recomponer el plano educativo y cultural del país...

**Sr. Genoud.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Sánchez.** — ... porque nosotros somos víctimas de la instrucción; no tenemos una cultura nacional real.

Por esto ahora tenemos el problema de los hielos continentales. A ninguno le enseñaron en la escuela qué problemas o qué litigios de límites teníamos con Chile, Bolivia o Brasil, etcétera. El hombre argentino no lo aprendió en la escuela porque un programa tramposo se lo impidió. tampoco se le enseñó qué problema existía en el sur del país, que era centenario, y que se votó en esta Cámara.

¿Qué problema vamos a tener mañana con el continente blanco...

**Sr. Genoud.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Sánchez.** — ... porque la Antártida sigue siendo para nosotros un montón de nieve sin que sepamos qué es lo que ocurre?

Estas cosas convergen, señor presidente, en este problema que se ha suscitado a través de la discusión de este proyecto de ley. Este es el

tema que debemos discutir en todas y cada una de las oportunidades.

Los peronistas no vamos a rehuir la discusión porque sabemos que aportaremos lo nuestro, así como lo harán los demás; de esta forma podremos sacar conclusiones que signifiquen realmente algo para la marcha del país.

Algunos venimos de viejas luchas y a veces no podemos dejar de lado los sedimentos de rencor que nos dejaron enfrentamientos muchas veces crueles; pero he observado nuevas generaciones que no vienen con el rencor de la política, sino que están dolidas por las golpizas que recibieron de un gobierno dictatorial.

Debemos compaginar todas esas cosas para que el espíritu argentino se fortalezca, para que el perfil del hombre argentino sea nítido y para que de una buena vez y para siempre el país se ponga en marcha. Así podrá cumplir con su destino de servicio para con todo su pueblo y la humanidad, como decía San Martín.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Storani.** — En realidad debo decir, señor presidente, que mi intención de hace media hora ha variado. Los tonos de los esfuerzos dialécticos de las últimas intervenciones han pretendido desviar el tema del acta-convenio que han tenido que firmar los gobernadores centrándolo en el problema de los jubilados.

Debo decir, cumpliendo un mandato del gobierno de mi provincia al que represento en este recinto del Senado de la Nación, que el vicegobernador que actuó en representación del gobierno de Córdoba, doctor Edgardo Grosso, formuló reservas fundamentales en esta acta que firmara oportunamente. El señor senador Cendoya realizó una alocución muy bien fundamentada y erudita, en la que se hizo referencia a estas reservas, y señaló que no están incluidas en la sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. No fueron tenidas en cuenta.

Tengo la obligación de decir que mi intervención en este momento es para suscribir todas y cada una de las palabras de mi compañero de representación, el señor senador Cendoya, que me relevan de mayor comentario porque su exposición ha sido —repito— muy fundamentada y erudita. Pero me veo obligado a decir que votaré negativamente en general este proyecto. Y lo voy a hacer con dolor porque se ha querido trasladar el problema de la discusión de la ley —que es la creación, traslado y modificación de impuestos coparticipados— al problema de los jubilados.

En este recinto se han hecho acaloradas defensas de los jubilados, como si alguno de los integrantes de esta Cámara se opusiera a la mejora que para la clase pasiva surge del texto del acuerdo. Esto no es así. El acuerdo es otra cosa.

Es lo mismo que si en este momento volviera sobre el tema que planteara la semana pasada al ministro de Economía, situación que se viera luego reflejada en la caída de la cotización de las acciones en la Bolsa, y en la discusión que luego se entablara entre él y un súbdito —en realidad, esta palabra está mal empleada, por lo que pido disculpas—, un subalterno como es el presidente de la Comisión Nacional de Valores, que no tiene la misma jerarquía que el ministro de Economía. Este es un absurdo político que se da en la crisis que está provocándose en el seno mismo del gobierno. Y el ministro tiene que rectificarse, que pedir disculpas, que tirarse de las orejas en público, que llamar a conferencia de prensa.

En realidad, me hubiera producido mucho más felicidad poder discutir a fondo este tema sin tener que eludir las responsabilidades que emergen de nuestra propia presencia en el acuerdo.

El vicegobernador de mi provincia dejó sentadas claramente sus reservas, sobre las cuales volveré al efectuarse el tratamiento en particular del proyecto. Pero rechazo esta imbricación de los valores de este acuerdo exclusivamente para transformar la indigna condición de los salarios o de los emolumentos que perciben los jubilados argentinos. En eso estamos de acuerdo todos los legisladores sin excepción. No cedo a nadie en este drama ni un derecho más que el mío porque estoy en igualdad de condiciones. Tengo el mismo dolor, la misma preocupación y el mismo reproche por no haber resuelto en el pasado este tema. Así lo sentimos todos, no tengo duda al respecto.

Quería dejar sentada mi posición porque el gobierno de Córdoba me ha instruido expresamente, por escrito, sobre cómo debemos comportarnos en esta materia: el señor senador Cendoya y yo. En consecuencia, adelanto mi voto negativo en general.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar en general...

**Sr. Genoud.** — Pido la palabra.

Muy brevemente, señor presidente, quiero decir que cuando me tocó hacer uso de la palabra como miembro informante no me aparté un milímetro de mi deber de abordar técnicamente el proyecto que estamos analizando.

Lo que ocurre es que casi como un hábito se van repitiendo términos en los remanidos discursos políticos que creo que no conducen a un buen funcionamiento de la Cámara. En efecto, hemos escuchado discursos que hacen referencia a la reelección presidencial. Es la tercera vez que el señor senador por La Rioja habla obsesivamente de ese tema, que debe ser motivo de un análisis pormenorizado en otra oportunidad, cuando el proyecto respectivo sea considerado por la Cámara, pero no cuando estamos tratando cuestiones de contenido fiscal de alta complejidad como éste.

Tampoco podemos vincular el asunto que nos ocupa con los hielos continentales u otros problemas internacionales.

Del mismo modo, ha habido de parte del señor senador por San Luis una serie de argumentaciones con las cuales, mirando al pasado, se vuelve también al remanido argumento del estado en que se recibió económicamente el país, etcétera.

El problema de los jubilados no comenzó con Alfonsín, no comenzó con el gobierno del radicalismo, sino que es un mal casi endémico desde hace tres o cuatro décadas.

Aquí estamos hablando del problema derivado de la relación conflictiva entre la Nación y las provincias, que pasa fundamentalmente por la distribución de los impuestos que se coparticipan. Por lo tanto, los legisladores tenemos que profundizar cada uno de estos temas dando las razones del caso pero sin apartarnos de lo que nos ocupa.

Hay que tener en cuenta que el problema de los jubilados es solamente una parte de la cuestión.

La discusión central es, por ejemplo, el retroceso que en el orden federal está viviendo la Argentina, no a partir de este gobierno sino de hace mucho años a esta parte. Si es que se quiere tapar ese tema con discursos que van a la fibra afectiva y emotiva —que compartimos— más que a la razón, creo que se está equivocando el camino parlamentario que corresponde.

Creo que jamás ha faltado de parte del radicalismo la voluntad para encontrar fondos que subsanen las magras remuneraciones de la clase pasiva argentina.

Se dijo que nosotros no teníamos soluciones. Nosotros hemos traído soluciones, señor presidente. Por ejemplo, a propuesta nuestra en la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de ley para el que el 30 por ciento del producido de las privatizaciones, lo que hoy representaría más

de 1.600 millones de dólares, fuera a las cajas de jubilaciones. Pero no se cumplió. Entonces, sería mejor que el justicialismo dijera que cree que este tipo de financiamiento que hoy tratamos es más positivo y útil, pero sin dejar de reconocer que nosotros tenemos otra estrategia, otra metodología que hemos propuesto.

Por otro lado, me pregunto qué es lo que propone, sugiere o exhorta el señor senador por San Luis cuando plantea el tema de los jubilados: ¿Nuestro silencio? ¿Nuestro aplauso? ¿Por qué no se reconocen las propuestas del radicalismo? Podrá ser materia opinable y no compartirlas el ministro Cavallo, que es el inspirador de todas estas políticas que obviamente respaldan los señores senadores oficialistas en cada oportunidad en que se tratan.

En aras de la seriedad con que tenemos que abordar los asuntos, lo bueno sería tratar los temas concretos y de alta complejidad como por ejemplo el que mencioné anteriormente.

El federalismo, al que aludieron los señores senadores Brasesco y Malharro de Torres es una realidad y pasa no solamente por lo impositivo. En efecto, pasa por el hecho de que las provincias son convidadas de piedra cuando se toman decisiones con respecto a privatizaciones, cuando se aprueba el Plan Brady, entre otras cosas. Y esto no lo digo solamente yo sino que muchas veces también lo hacen gobernadores de provincia que están muy acomedidos desde la tribuna mirando el gran partido que se está jugando en la Capital Federal.

¿Es o no una realidad que hace al funcionamiento del sistema que algunas leyes que nosotros sancionamos aquí son vetadas en veinticuatro horas por el Poder Ejecutivo, como ocurrió por ejemplo con la sanción de la iniciativa presentada por el senador Molina sobre poder de policía en materia de control hidrocarburo? También puedo mencionar por qué no hay participación provincial en los directorios de algunas empresas. Tenemos el caso del marco regulatorio gasífero, ley que fue vetada parcialmente en una nueva metodología jurídica de los vetos; se vetan artículos o parte de los artículos.

**Sr. Britos.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Genoud.** — Terminó aquí.

De modo que no nos apartamos de la cuestión cuando hablamos de que tenemos todo un proceso federal que debe ser caro a nuestros sentimientos como representantes de los Estados provinciales.

Por lo tanto, en eso coincidamos; no para enardecernos y mirar hacia el pasado para ver quién se equivocó más. Propongo ver con un criterio afirmativo el futuro.

Pero también quiero decir, en honor a la verdad, que quienes siempre buscan el discurso político con un objetivo retardatario para vernos revueltos y enyuetos en un planteo de carácter histórico son, casi sin excepción, los miembros de la bancada justicialista.

Con estas pocas palabras, señor presidente, he querido plantear este tipo de cosas, porque no es la primera vez que ocurren. Creo que la gran invitación que nos hace la opinión pública a diario, cuando consideramos temas de contenido técnico, es que no nos apartemos de éstos, —con las pinceladas políticas que correspondan— buscando siempre el subterfugio de la polémica superficial para esconder la falta de posiciones técnicas en problemas o temas como el que hoy nos ocupa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut, quedando así cerrada la lista de oradores a continuación, se pasará a votar.

**Sr. Mac Karthy.** — Señor presidente: es simplemente para fundamentar mi voto afirmativo, al margen de decir que estoy totalmente de acuerdo con este convenio celebrado entre la Nación y las provincias.

Como representante de la provincia de Chubut, estoy en un todo de acuerdo con el gobernador de mi provincia, Carlos Maestro, quien fue representante de todos los gobernadores de las provincias argentinas y que agradeció al presidente de la Nación y a la Nación en su conjunto la firma del acta.

**Sr. Posleman.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Está cerrada la lista de oradores.

**Sr. Posleman.** — La Presidencia no tiene facultades para cerrar la lista de oradores. El que tiene facultad para hacerlo es el cuerpo.

**Sr. Presidente (Menem).** — La Presidencia va a someter a votación del cuerpo el cierre de la lista de oradores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda cerrada la lista de oradores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración en particular. La Presidencia advierte a los señores senadores que el artículo 1° se va a leer con la modificación —voy a decir presuntamente— consensuada, que se hizo llegar a esta Secretaría.

**Sr. Brasesco.** — Que quede constancia de que el bloque radical votó por la negativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Así se hará, señor senador.

Por Secretaría se dará lectura del artículo 1° con la modificación propuesta.

**Sr. Secretario (Piuze).** — (*Lee*): "Artículo 1°. Ratifícase, en lo que es materia de competencia del Congreso Nacional, el 'Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales', suscrito el 12 de agosto entre el Poder Ejecutivo nacional y los señores gobernadores de las provincias y/o quienes en su representación lo firmaran, y que como anexo I, forma parte integrante de la presente".

Agregado. "La primera parte de la cláusula séptima del acuerdo debe entenderse sólo como el derecho de peticionar ante el Congreso, dejando plenamente a salvo las facultades constitucionales de éste".

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Genoud.** — Señor presidente: quiero dejar constancia de que el bloque radical va a votar esta modificación al artículo 1° del proyecto en tratamiento.

Esta modificación, que ha sido concertada junto a otras del artículo 2°, está demostrando nuestra voluntad no obstruccionista pese a las diferencias y discrepancias que en este tema tiene el radicalismo.

Además, para aquellos que se enardecieron hace unos instantes atacando al bloque radical debo decir que utilizando un procedimiento legítimo, como por ejemplo retirarse del recinto, el radicalismo podría quebrar el quórum de esta sesión. Pero no lo va a hacer.

Estos son los aportes que nosotros hacemos desde la discrepancia, desde la disidencia, pese a haber votado en general por la negativa este proyecto, para no hacerle al justicialismo lo que éste nos hizo cuando fuimos gobierno.

**Sr. Britos.** — Volvemos al pasado. (*Risas.*)

—Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Menem).** — La Presidencia ruega a los señores senadores que no dialoguen para mantener el orden de la sesión.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor presidente: quiero ratificar las expresiones formuladas por el señor senador por Mendoza en el sentido de que se ha consensuado de la manera en que se ha expresado el artículo 1º en su párrafo final.

También hay voluntad de colaboración de los diputados de la Unión Cívica Radical, quienes expresaron que en principio estaban de acuerdo con la modificación y que iban a prestar toda la colaboración para lograr la rápida sanción de este proyecto de ley.

**Sr. Romero Feris.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Romero Feris.** — Señor presidente: deseo manifestar que no participé de la concertación, es decir que no voto a favor.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Señor presidente: formula la misma aclaración.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se deja constancia de las manifestaciones de los señores senadores por Corrientes.

Se va a votar el artículo 1º en la forma como fue leído por Secretaría.

— La votación resulta afirmativa.

— Se anuncia el artículo 2º.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Que sólo se lea por Secretaría el texto agregado como inciso c). El resto queda como está.

**Sr. Presidente (Menem).** — La Presidencia le informa al señor senador que son dos los incisos que se agregan.

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Piuze).** — El texto propuesto como inciso c) es el siguiente: *(Lee)* "Las jurisdicciones provinciales deberán mantener, en todos los casos, los destinos específicos de los fondos a que aluden los incisos anteriores conforme lo previsto en los respectivos instrumentos de creación".

Como inciso d) se propone lo siguiente: *(Lee)* "Con relación al Fondo Nacional de la Vivienda serán responsabilidad exclusiva de los organismos ejecutores de cada jurisdicción provincial el otorgamiento de aptitudes técnicas y financieras de cada proyecto como toda otra facultad

de orden reglamentario, lo que regirá a partir de la fecha de suscripción del acuerdo."

**Sr. Presidente (Menem).** — Se va a votar el artículo 2º con el agregado propuesto.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncian y aprueban los artículos 3º a 5º.

— El artículo 6º es de forma.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda sancionado el proyecto de ley. <sup>1</sup>

Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

**Sr. Storani.** — Señor presidente...

**Sr. Presidente (Menem).** — La Presidencia pone a consideración la inserción solicitada por el señor senador por Corrientes, bloque autonomista.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se procederá en consecuencia. <sup>1</sup>

**Sr. Storani.** — Señor presidente: estaba pidiendo la palabra...

**Sr. Presidente (Menem).** — Le estoy por dar el uso de la palabra, señor senador, pero antes debía procederse a la votación de la inserción.

Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

**Sr. Storani.** — Es para pedir que se inserte en toda su extensión el texto de las reservas que formuló el gobierno de Córdoba, y que fueron leídas en parte por el señor senador Cendoya. Conviene que queden específicamente incorporadas para su conocimiento.

**Sr. Rodríguez Saá.** — No tenemos objeción.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si hay asentimiento, se incorporarán las reservas en la forma en que están oficializadas.

Quienes estén por la afirmativa de que se inserten las reservas formuladas por el señor vicegobernador de Córdoba en ocasión de firmarse el acta-acuerdo, sírvanse así indicarlo.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Se procederá en consecuencia. <sup>1</sup>

**Sr. Rodríguez Saá.** — Respecto de la manifestación del señor senador por Corrientes, bloque au-

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

tonomista, en el sentido de que no habría sido invitado o no ha participado de la concertación, quiero aclarar que no es así. La concertación se hizo en el ámbito de las reuniones de presidentes de bloque a las cuales estuvo invitado y participó; si el señor senador por Corrientes no ha concertado fue porque no ha querido.

**Sr. Romero Feris.** — En ningún momento — y pido que se lea la versión taquigráfica —, manifesté que no participé de la reunión de presidentes de bloque. Lo que he dicho es que no estuve de acuerdo con la concertación mencionada por el señor senador por San Luis.

**Varios Señores Senadores.** — ¡Ah...!

**Sr. Romero Feris.** — Pido que se lea de la versión taquigráfica lo que he dicho anteriormente; por lo cual no votaba a favor sino en contra tanto en general como en particular.

**Sr. Presidente (Menem).** — La Presidencia estima que el tema está agotado, razón por la cual pasamos al asunto siguiente.

## 5

# MODIFICACIONES A LA LEY DEL JUICIO ORAL EN EL AMBITO DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION

**Sr. Aguirre Lanari.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Es para hacer referencia a un tema de absoluta urgencia, sobre el cual he recabado previamente la conformidad de los representantes de los distintos bloques del Senado.

En la reunión de presidentes de bloque que celebramos ayer llegó a nuestro conocimiento una nota de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por la que se pedía que habiéndose deslizado algunos errores en los anexos de la ley de implementación de juicio oral que votamos, procediéramos a sancionar una fe de erratas.

Pero es del caso, señor presidente, que habiendo efectuado un análisis rápido y somero observamos que no se trataba de una mera fe de erratas, como se pretendía, sino que existían algunas fallas en la manera de presentar el asunto que hacían inconveniente votarlo tal cual fuera remitido por el presidente de la Cámara de Diputados.

Después de cambiar impresiones con los distintos miembros de la Comisión de Labor Parlamentaria llegamos a la conclusión de que para dar mayor prolijidad y claridad al asunto era con-

veniente requerir la opinión del Ministerio de Justicia. Por ello solicitamos que nos hiciera llegar un texto preciso de esas reformas y de la manera adecuada de completar los distintos anexos que eran materia de atención.

En este momento acaba de llegar el texto solicitado, con la firma del señor ministro de Justicia. Como estamos trabajando contra reloj para contar con los tribunales y funcionarios requeridos por la dinámica del sistema de juicio oral que hemos creado, propongo a los señores senadores constituir la Cámara en comisión y aprobar ahora mismo este trabajo remitido bajo la responsabilidad del señor ministro de Justicia. De esta manera, aprobándolo esta noche, podremos girarlo inmediatamente a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saa.** — Entiendo que lo que se solicita es el tratamiento sobre tablas. Estamos totalmente de acuerdo con que se vote ya mismo.

**Sr. Brasesco.** — Habría que constituir la Cámara en comisión, señor presidente.

**Sr. Presidente (Menem).** — Ruego al señor senador por Corrientes que indique si lo que propone es el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Efectivamente, señor presidente. Tiene esa forma.

**Sr. Presidente (Menem).** — Entonces, se va a votar el pedido de tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley por el que se rectifican algunos errores deslizados en la sanción de la ley de implementación del juicio oral.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — ¿El señor senador por Corrientes hará uso de la palabra?

**Sr. Aguirre Lanari.** — No haré uso de la palabra, señor presidente.

**Sr. Presidente (Menem).** — La Presidencia solicita al señor senador por Corrientes que haga llegar a Secretaría el texto del proyecto.

— Así se hace.

**Sr. Brasesco.** — ¿No habrá algún inciso por el que se deje sin efecto la intervención a Corrientes? (*Risas*).

**Sr. Rodríguez Saá.** — ¿No dirá algo de la intervención a Corrientes? (*Risas*).